



*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C.A.*

DICTAMEN DE COMISIÓN

HONORABLE PLENO

ANTECEDENTES

La Comisión Extraordinaria de Reforma al Sector Justicia, recibió por mandato expreso del Honorable Pleno del Congreso de la República, la Iniciativa de Ley que dispone aprobar la Ley de Notariado, presentada por la Corte Suprema de Justicia del Organismo Judicial, registrada con número 3123 y conocida por el Honorable Pleno el día veinticuatro de febrero de dos mil cinco.

Breve reseña histórica del Notariado en Guatemala:

La historia del notariado en Guatemala informa que los antecesores de los notarios fueron en un principio únicamente redactores de documentos. El 27 de julio de 1524 se redactó la primer acta de cabildo, actuando como escribano Alonso de Reguera. El escriba no de cabildo no ejercía como escribano público. Sólo había un escribano público en la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala.

La Ley liberal del 7 de abril de 1877 y la del 21 de mayo del mismo año, fueron las impulsoras o promotoras que el notariado fuera una carrera universitaria, se creó además la Ley de Notariado en la época de la Reforma Liberal junto al Código Civil, al de Procedimientos Civiles y la Ley General de Instrucción Públicas.. Por primera vez en la historia y derivado de esas normas, se les denomina notarios.

Durante el Gobierno de Justo Rufino Barrios se promulgó la Ley de Notariado (Decreto 271), de fecha 20 de febrero de 1882. En tal ocasión, se reguló que los notarios no eran dueños de los protocolos sino depositarios.

El Código de Notariado (Decreto 314) que nos rige actualmente, fue emitido por el Congreso de la República el 30 de noviembre de 1946, sancionado el 10 de diciembre y entró en vigencia el 1 de enero de 1947.

El notario debe ser un profesional universitario con una formación universitaria básica. El notario debe obtener previamente una licenciatura en derecho y simultáneamente debe obtener el título de Abogado.



*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C.A.*

**CONSIDERACIONES GENERALES Y ARGUMENTOS LEGISLATIVOS Y
DOCTRINARIOS DE LA PROPUESTA**

Los miembros que integramos esta Comisión Extraordinaria, procedimos al análisis, discusión y a realizar consultas a diversas instancias de profesionales de la abogacía y el notariado sobre los aspectos que se pretende reformar así como de los que deben seguir con vigencia.

Entre las reformas que propone la Corte Suprema de Justicia se encuentran normas sumamente novedosas, mejorando la función notarial, dicha función notarial según las definiciones doctrinarias consiste en las actividades que desempeña el Notario pendientes a lograr como resultado el objeto principal del Derecho Notarial, como lo es la creación del instrumento público, lo más humanamente perfecto, es llamada también el que hacer notarial.

De conformidad con el análisis realizado, esta Comisión considera, y así lo plantea la iniciativa, que debe continuarse utilizando el sistema notarial latino, con adiciones de normas que tienden a regular de mejor manera la función del notario así como adecuarla a las necesidades de modernidad requeridas por tal profesión y por la sociedad guatemalteca en conjunto.

Sistema Notarial Latino:

La propuesta contenida en este proyecto de Ley está basada en el sistema notarial latino, cuyas características efectivamente fueron planteadas en el contenido de la misma y, debidamente analizadas por los integrantes de la Comisión, vale la pena mencionar que tales características plasmadas son las siguientes:

- a) Los notarios deben pertenecer a un Colegio Profesional, además deberán registrarse en la Dirección Nacional del Notariado;
- b) La responsabilidad en el ejercicio profesional es personal ;
- c) El ejercicio del notariado es abierto, y con la propuesta contenida en este dictamen, la actuación del notario en el extranjero está debidamente regulada;
- d) Es incompatible con el ejercicio de cargos públicos que lleven aneja o no jurisdicción; novedad también del presente proyecto;
- e) El que lo ejerce debe ser un profesional universitario, egresado en el país o, incorporado con arreglo a la legislación guatemalteca, y, de



*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C.A.*

- conformidad con la propuesta poseer el grado académico de maestría o doctorado en derecho notarial o haber ejercido la profesión de abogado por más de tres años, novedad en este sentido es también la obligación que tendrán los notarios de registrar su firma y sello profesional en la Dirección Nacional del Notariado;
- f) Desempeña una función pública, pero no depende directamente de autoridad administrativa; dentro de este ámbito cabe mencionar que el notario es definido como el profesional del Derecho encargado de una función pública consistente en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos adecuados a este fin y confiriéndoles autenticidad; conservar los originales de éstos y expedir copias que den fe de su contenido. En su función está comprendida la autenticación de hechos;
 - g) Aunque algunas de sus actuaciones son de carácter público, lo ejerce un profesional del derecho;
 - h) Existe un protocolo notarial en el que asienta todas las escrituras que autoriza; la definición del protocolo en este proyecto de ley se amplía y se adecua a las funciones establecidas en la creación de la Dirección Nacional del Notariado.

Los principios notariales típicos del Sistema Latino, están plasmados en esta iniciativa de Ley, y son los siguientes: de Fe Pública, de la Forma, de Inmediación, de Rogación, del Consentimiento, de Seguridad Jurídica, de Autenticación y de Publicidad.

La propuesta tiene su base en la intencionalidad de actualizar la norma que regula el notariado en Guatemala dentro del contexto de un país globalizado así como el garantizar a la población el libre acceso a los servicios del notario, quien tendrá la facultad de actuar en cualquier hora y día hábil o inhábil.

Del resultado del análisis, discusión y ponencias presentadas, se arribó a las siguientes:

CONCLUSIONES

El proyecto de Ley de Notariado, de conformidad con esta Comisión Extraordinaria de Trabajo pretende alcanzar las siguientes finalidades esenciales:

1. Modernizar las disposiciones que regulan la función notarial, adecuándolas a los requerimientos y necesidades de la sociedad moderna y globalizada.



*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C.A.*

2. Recopilar en un solo texto sistemáticamente ordenado las normas relacionadas con aspectos substanciales del ejercicio de la fe pública notarial, las cuales se encuentran dispersas en varias leyes, tales como la Ley Reguladora de la Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria, entre otras.
3. Crear órganos de supervisión y control más eficientes y establecer trámites eficaces para dilucidar la responsabilidad de los notarios en su ejercicio profesional, sin interferir en el control disciplinario que compete al Colegio de Abogados y Notarios, que se rige por las disposiciones del Código de Ética Profesional.
4. Dotar de mayor seguridad jurídica a los actos y contratos que autoricen los notarios, estableciendo normas que prevengan o ayuden a contrarrestar prácticas no adecuadas en el ejercicio profesional, fortaleciendo la confianza y el prestigio en el notariado guatemalteco.
5. Regular por primera vez en el derecho objetivo la función social del notario, posibilitando su intervención en asuntos de interés colectivo y en la contratación pública del Estado y sus entidades, así como la función del notario en el extranjero; y,
6. Contar con un instrumento legal moderno, redactado con lenguaje preciso que facilite su correcta interpretación y aplicación y que posibilite, por otro lado, la plena vigencia y efectividad en el ejercicio profesional de los principios básicos del Sistema latino.

El Proyecto de Ley que se presenta a consideración del Honorable Pleno del Congreso de la República, cumple con las características propias de técnica jurídica y legislativa y la propuesta se encuadra a la necesidad que impera actualmente de reformar y modernizar la función notarial mediante el instrumento jurídico pertinente, así como de ordenar y encuadrar en una norma los procedimientos en materia de jurisdicción voluntaria, por lo tanto, y con fundamento en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, se emite el siguiente:

DICTAMEN:

Con base en todo lo anteriormente expuesto, la Comisión Extraordinaria de Reforma al Sector Justicia, **AL EMITIR DICTAMEN LO HACE EN SENTIDO FAVORABLE**, sugiriendo al Honorable Pleno del Congreso de la República conocer la presente iniciativa y continuar el procedimiento para la discusión y posible aprobación respectiva de conformidad con el Decreto Número 63-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Organismo Legislativo.



*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C.A.*

**DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN EXTRAORDINARIA DE
REFORMA AL SECTOR JUSTICIA, EL _____ DE SEPTIEMBRE DE DOS
MIL SIETE.**

JUAN RAMON ALVARADO HERRERA
Presidente

CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ RUBIO
Vicepresidente

JORGE MARIO BARRIOS FALLA

CONCHITA MAZARIEGOS TOBIAS

CARLOS ENRIQUE BAUTISTA GODINEZ

MANUEL ANTONIO BALDIZON

MARCO VINICIO CEREZO AREVALO

CARLOS AUGUSTO VALLE TORRES

GLADYS ANABELLA DE LEON

CARLOS ALBERTO GODOY FLORIAN

MARIO RENE CHAVEZ GARCIA

JORGE LUIS ORTEGA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DECRETO NÚMERO -2004

CONSIDERANDO:

Que es conveniente actualizar las disposiciones que regulan la función notarial y adecuarla a los requerimientos y necesidades de la sociedad moderna.

CONSIDERANDO:

Que es necesario recopilar en un solo texto las distintas normas que regulan dicha función, que actualmente se encuentran dispersas en varios cuerpos legales.

CONSIDERANDO:

Que el aumento considerable de notarios hace urgente la creación de órganos de supervisión del ejercicio profesional, sin perjuicio del control disciplinario que compete al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.

POR TANTO:

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el inciso a) del artículo 171 de la Constitución de la República,

DECRETA:

La siguiente:

LEY DE NOTARIADO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 1. Finalidad.

La finalidad de esta ley es regular la institución del notariado, que incluye la función notarial y el ejercicio de la profesión del notario guatemalteco, tanto en la República de Guatemala como en el extranjero.

Las materias no previstas en esta ley se regirán por lo que disponen otras leyes relativas al ejercicio notarial y por los principios del Notariado Latino

Artículo 2. Denominaciones y abreviaturas.

En el texto de esta ley se usarán las siguientes denominaciones y abreviaturas para referirse a los órganos o a las normativas que se indican en cada caso:

Arancel: arancel de notarios.

Colegio Profesional: Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.

Congreso: Congreso de la República de Guatemala.

Consejo: Consejo Notarial.

Constitución: Constitución Política de la República de Guatemala.

Dirección o Dirección del Notariado: Dirección Nacional del Notariado.

Escritura: escritura pública.

Instrumentos o Documentos Notariales: son los autorizados por notario.

Número de Registro: número de registro del notario en la Dirección Nacional del Notariado.

Papel de Protocolo: papel especial para protocolo.

Procuraduría: Procuraduría General de la Nación.

Reglamento: Reglamento de la presente Ley de Notariado.

Unidad de Multa: el equivalente a un dólar de los Estados Unidos de América, en moneda nacional.

TÍTULO II LA FUNCIÓN NOTARIAL Y EL NOTARIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAPÍTULO I FUNCIÓN NOTARIAL

Artículo 3. La Función notarial.

La función notarial, a la que es inherente la fe pública, comprende la actividad profesional y los actos que el notario realiza de conformidad con la presente y otras leyes aplicables. Dicha función, inspirada en los principios del Notariado Latino, es de naturaleza esencialmente pública, personalísima, exclusiva, rogada, indelegable, de interés social, imparcial, libre, autónoma y remunerada.

Artículo 4. Ámbito de ejercicio.

La función notarial se puede ejercer en cualquier hora y día hábil o inhábil, tanto en el territorio nacional como en el extranjero; en este último caso, sin embargo, debe circunscribirse a hacer constar hechos, actos y contratos que hayan de surtir efectos en Guatemala.

La actuación de los notarios que residan en el extranjero se regirá por lo establecido en el Título VII de esta Ley.

Para garantizar el libre acceso a los servicios de un notario, éste deberá mantener oficina abierta al público, de acuerdo con lo que establece el Reglamento.

Artículo 5. Rogación y libertad de elección.

El notario solamente actuará a requerimiento de persona interesada, por mandato de autoridad competente o por disposición de la ley. Se exceptúan los casos específicos autorizados en esta ley.

Se reconoce el derecho de los particulares a elegir libremente al notario, salvo las excepciones contenidas en esta ley.

Artículo 6. Responsabilidad.

El notario está obligado, bajo responsabilidad personal, a prestar sus servicios con lealtad, dedicación y diligencia y con arreglo al ordenamiento jurídico.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Será responsable civilmente por los daños y perjuicios que cause mediante dolo, culpa o ignorancia inexcusable, o como consecuencia del quebrantamiento del secreto profesional. Incurrirá en responsabilidad penal cuando, por acción u omisión en el ejercicio de su función, cometa delito o falta sancionados en el Código Penal. Será responsable administrativamente por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en esta ley o en cualquiera otra aplicable al desempeño de su profesión.

También podrá ser objeto de sanciones disciplinarias por la infracción de los postulados, deberes y obligaciones que le impone el Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.

Artículo 7. Órganos competentes.

Para conocer de las responsabilidades civiles y penales del notario serán competentes los tribunales del orden común. En todo proceso del que resultare alguna responsabilidad civil del notario o en el que se impugnaren por falsedad o nulidad los documentos autorizados por él, el notario deberá ser emplazado, oído y se le garantizará su efectiva intervención. De lo contrario, no podrá ser afectado en sus derechos.

Los órganos jurisdiccionales comunicarán a la Dirección Nacional del Notariado, la existencia de un auto de prisión preventiva o de procesamiento decretado contra un notario por cualquiera de los delitos indicados en el Artículo 9, inciso 9.3, aunque se encuentre gozando, en el primer caso, de una medida sustitutiva.

Las sanciones de carácter administrativo serán impuestas por la Dirección Nacional del Notariado o por la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con los procedimientos establecidos en la ley.

La responsabilidad disciplinaria deberá deducirse ante el órgano competente del Colegio Profesional y se sujetará a los procedimientos y sanciones previstas en la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria.

CAPÍTULO II

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

EL NOTARIO

Artículo 8. Notario.

Es el profesional del derecho, investido de fe pública por el Estado, que tiene a su cargo recibir, asesorar, interpretar, redactar y dar forma legal a la voluntad de las personas que ante él acuden, y la de conferir autenticidad y certeza jurídica a los actos y hechos, mediante la consignación de los mismos en documentos públicos de su autoría.

Está facultado para actuar como mediador, tramitar y resolver asuntos no contenciosos en los que la ley le atribuya competencia como auxiliar de la administración de justicia, y para intervenir en otros casos que la ley autorice.

Corresponde a la Corte Suprema de Justicia, en el acto de juramentación, investir al notario de fe pública.

Artículo 9. Requisitos habilitantes.

Para ejercer como notario se requiere:

- 9.1. Ser guatemalteco, mayor de edad, del estado seglar y tener su domicilio en la República de Guatemala, salvo lo dispuesto para los notarios a que se refiere el título VII de esta ley.
- 9.2. Ser de reconocida honorabilidad.
- 9.3. No haber sido condenado por delitos dolosos contra la fe pública, administración de justicia, administración pública, la vida, integridad, libertad, seguridad y patrimonio de las personas, quiebra o insolvencia fraudulenta, salvo que hubiere sido rehabilitado en la forma que establece esta ley.
- 9.4. Haber obtenido el título profesional de notario en una universidad guatemalteca o haber realizado la respectiva incorporación con arreglo a la ley.
- 9.5. Poseer grado académico de maestría o doctorado en derecho notarial o haber ejercido la profesión de abogado por más de tres años.
- 9.6. Estar inscrito en el Colegio Profesional y haber registrado su firma y sello profesional en dicha entidad y en la Dirección del Notariado.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

- 9.7. Jurar ante la Corte Suprema de Justicia que ejercerá la profesión con estricto apego a la Constitución y a las leyes, con imparcialidad, ética y responsabilidad.
- 9.8. Registrar en la Dirección Nacional del Notariado la dirección de su oficina profesional y cualquier cambio posterior de la misma.

El cumplimiento de los requisitos anteriores se acreditará ante la Dirección Nacional del Notariado, la que podrá requerir cualquier información o documento adicional, aclaratorio o complementario, si así lo considera necesario.

Artículo 10. Impedimentos absolutos.

Tiene impedimento absoluto para ejercer como notario, aun cuando ya hubiere adquirido tal calidad, quien se encuentre en cualquiera de las situaciones siguientes:

- 10.1. Los ciegos, sordos o mudos; quien se encontrare en estado de interdicción judicialmente declarado; quien tenga, a juicio de la Dirección Nacional del Notariado, impedimento físico o mental que, por su naturaleza y gravedad establecidas mediante dictamen médico forense, no le permita el correcto ejercicio de la profesión.
- 10.2. Quien hubiere sido condenado, en sentencia firme, por cualquiera de los delitos mencionados en el Artículo 9, inciso 9.3, de la presente ley.
- 10.3. Quien hubiere sido suspendido definitivamente en el ejercicio de la profesión de notario o de abogado, por disposición firme del Tribunal de Honor o del órgano competente del Colegio Profesional; por resolución judicial, pasada en autoridad de cosa juzgada; o por resolución firme de la Corte Suprema de Justicia, en los casos que prevé esta ley.

En las situaciones a que se refieren los tres incisos anteriores, si la Dirección tiene conocimiento de que el notario sigue ejerciendo, lo denunciará en forma inmediata al Ministerio Público.

Artículo 11. Impedimentos temporales.

Tienen impedimento temporal para ejercer como notariado:

- 11.1. Los militares en servicio activo.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

- 11.2. Los toxicómanos y los alcohólicos habituales.
- 11.3. Los que tengan motivado auto de prisión preventiva o de procesamiento por cualquiera de los delitos indicados en el Artículo 9, inciso 9.3, aunque se encuentren gozando, en el primer caso, de una medida sustitutiva.
- 11.4. Los que desempeñen cargo o empleo público que lleve o no aneja jurisdicción, cualquiera que sea el tiempo de prestación de servicios o la forma de contratación.
- 11.5. Los que hubiesen perdido la calidad de colegiado activo.
- 11.6. Los notarios o abogados suspendidos temporalmente en el ejercicio de su profesión por el Tribunal de Honor, el órgano competente del Colegio Profesional o la Dirección Nacional del Notariado.
- 11.7. Los que no hubiesen cumplido, durante un trimestre del año civil o más, las obligaciones que impone el Artículo 89 de esta Ley. Sin embargo, los notarios a que se refiere esta limitación podrán extender testimonios especiales, a efecto de subsanar tal impedimento.
- 11.8. Los que no hubieren cumplido las obligaciones que establecen los Artículos 16 numeral 16.4, 25, 26, 29, 34 y 98 de la presente ley.

Artículo 12. Excepciones.

No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, podrán ejercer el notariado:

- 12.1. Los miembros del personal diplomático, cónsules y vicecónsules acreditados y residentes en el extranjero, siempre que sean guatemaltecos y notarios habilitados legalmente para autorizar los instrumentos en los que se hagan constar hechos, actos y contratos que deban surtir efectos en Guatemala.
- 12.2. Los miembros del personal docente de la Universidad de San Carlos de Guatemala y de los establecimientos de enseñanza del Estado.
- 12.3. Los integrantes de los tribunales de conciliación y arbitraje, regulados en el Código de Trabajo; los magistrados suplentes de la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Apelaciones y de cualquier otro tribunal colegiado; los miembros de las comisiones paritarias de salarios, juntas electorales y jurados de Imprenta.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

- 12.4. Los síndicos y concejales, en asuntos en los que carezca de interés la respectiva municipalidad.
- 12.5. Los abogados consultores, consejeros o asesores; los miembros o secretarios de las comisiones técnicas, consultivas o asesoras del Estado, de los municipios, de las entidades descentralizadas, autónomas o semiautónomas y de los registros públicos, cuando el cargo que sirvan no sea mayor de medio tiempo o la asesoría que presten se refiera a un caso concreto y en el acto o contrato respectivo no esté involucrada o tenga interés la entidad que los hubiese contratado; sin embargo, no podrán autorizar actos o contratos en los que tengan interés las entidades a las que prestan sus servicios.

Artículo 13. Prohibiciones.

Al notario le está prohibido:

- 13.1. Usar firma o sello que no hayan sido previamente registrados en el Colegio Profesional y en la Dirección Nacional del Notariado.
- 13.2. Autorizar documentos notariales en los que tenga interés o de los que pueda resultar beneficio a favor suyo o de sus parientes dentro de los grados de ley, de su cónyuge o de persona con la que haga vida en común.
- 13.3. Autorizar documentos o compulsar testimonios antes de que hubiesen sido firmados por los otorgantes y por las otras personas que intervinieren en ellos.
- 13.4. Extender testimonio o copia de testamento o donación por causa de muerte, a persona distinta del otorgante, mientras éste viva.
- 13.5. Compulsar testimonios de documentos autorizados por otro notario, sin tener en depósito el protocolo, con excepción del caso previsto en el Artículo 88.
- 13.6. Intervenir o dar fe de hechos sin haberse identificado como notario y sin haber explicado el motivo de la diligencia.
- 13.7. Actuar en calidad de intérprete, traductor, lector o transcriptor de Braille, en los documentos en los que intervenga como notario.
- 13.8. Prestar sus servicios profesionales en actos contrarios a la ley, la moral o las buenas costumbres.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Artículo 14. Prohibición especial.

Los abogados que sean directores, administradores, gerentes o apoderados de personas jurídicas de cualquier naturaleza y nacionalidad, no podrán autorizar, como notarios, los documentos en los que esas entidades comparezcan o tengan interés.

De igual manera, no podrán hacerlo los abogados titulares y auxiliares o quienes sean apoderados de bancos, sociedades financieras, casas de cambio o de bolsa, almacenes generales de depósito, afianzadoras, aseguradoras, bancos o financieras fuera de plaza, ni de cualquier entidad que preste servicios financieros, que esté sometida a la vigilancia de la Superintendencia de Bancos, o que integre o controle un grupo financiero, o pertenezca a éste.

Artículo 15. Casos especiales.

No obstante lo establecido en el inciso 13.2 del Artículo 13, al notario le es permitido autorizar, usando la antefirma "por mí y ante mí", los siguientes documentos:

- 15.1 Los de aclaración, ampliación o rectificación, que tengan por único objeto enmendar errores u omisiones de forma, cuando no se altere en ningún sentido la voluntad de las partes ni se modifique la esencia del acto o contrato.
- 15.2 Los poderes que otorgue, sus prórrogas, modificaciones y revocaciones.
- 15.3 La sustitución total o parcial de los poderes que le hayan sido conferidos, cuando esté facultado para ello.
- 15.4 Los que contengan actos de los que le resulten sólo obligaciones y no derecho alguno, o los que liberen dichas obligaciones cuando el notario sea el acreedor.
- 15.5 Los que formalicen su testamento o donación por causa de muerte, y las modificaciones y revocaciones de estos actos.

Artículo 16. Derechos del notario.

El notario tiene derecho a:

- 16.1 Ejercer la función notarial, de la cual sólo podrá separársele en los casos y términos previstos en la ley.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

- 16.2 Negarse a prestar sus servicios profesionales cuando se le cause agravio personal o profesional, o si no se le cancelan oportunamente los gastos y honorarios establecidos en el Arancel.
- 16.3 Cobrar honorarios de conformidad con el Arancel, salvo pacto en contrario; o en los casos específicos que determina la ley, en razón del interés social del acto o contrato.
- 16.4 Cambiar la dirección de su oficina profesional y modificar su firma y sello, circunstancias en las cuales debe registrar los cambios en el Colegio Profesional y en la Dirección Nacional del Notariado, dentro de los quince días hábiles siguientes.

Artículo 17. Encargo de confianza.

El notario podrá recibir, como encargo de confianza a término, dinero, títulos de crédito, acciones, valores y documentos negociables que se le entreguen para el exclusivo cumplimiento o seguridad de las obligaciones y derechos que provengan de los actos o contratos que se celebren ante sus oficios.

En estos casos, deberá extender, en el mismo acto, recibo firmado y sellado en el que hará constar detalladamente los bienes que recibe, la finalidad y el plazo dentro del cual deba cumplir el encargo. Si se venciera dicho plazo y no se hubiere realizado el propósito de la entrega, deberá restituir al constituyente los bienes que corresponda, ya sea directamente o por medio de consignación en caso de ausencia o negativa de éste.

El notario responderá civil y penalmente si destina los bienes a un fin diferente de aquel para el que le fueron entregados, si los emplea en provecho propio o de terceros, o si por su culpa deja de cumplir puntualmente el encargo que se le hizo.

También podrá recibir fondos para el pago de tributos, contribuciones, tasas y gastos registrales, los que deberá cancelar dentro de los plazos que la ley señale.

CAPÍTULO III DOCUMENTOS NOTARIALES

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Artículo 18. Definición.

Son los documentos públicos autorizados por notario de conformidad con los requisitos y formalidades que establece la ley.

Los documentos notariales producen fe y hacen plena prueba, salvo el derecho que tienen las partes de redargüirlos de nulidad o falsedad.

Artículo 19. Idioma.

Los documentos notariales se redactarán en español, con estilo claro, preciso, sin palabras ni frases oscuras o ambiguas, observando como reglas imprescindibles la verdad en el concepto, la propiedad en el lenguaje y la severidad en la forma.

Sin embargo, excepcionalmente podrán emplearse palabras latinas o de uso común en el lenguaje jurídico. Podrán usarse términos técnicos o científicos en otro idioma cuando, a juicio del notario, no existan vocablos equivalentes aceptables en español, o así lo pida uno de los interesados para obtener más precisión técnica o mayor claridad en la respectiva estipulación del acto o contrato.

Artículo 20. Forma.

En los documentos notariales se observarán las formalidades siguientes:

- 20.1. Se escribirán a mano, a máquina o por cualquier otro medio de impresión mecánico, electrónico, magnético o similar; con caracteres nítidos, perfectamente legibles, no removibles e indelebles, que aseguren su permanencia; sin abreviaturas, con excepción de las transcripciones o el uso de acrónimos, denominaciones o siglas que correspondan a entidades o partes plenamente identificadas en el propio documento.
- 20.2. Las fechas, números o cantidades se expresarán en letras. En caso de discrepancia entre lo escrito en letras y cifras, si también se utilizaren éstas, se estará a lo expresado en letras. Para la subdivisión de las cláusulas, el notario podrá utilizar, de modo optativo, números, letras u otros signos.
- 20.3. Los espacios en blanco que permitan intercalaciones o agregados, se llenarán con una línea antes de firmar el documento.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Las transcripciones se harán mediante copia literal, entre comillas, del texto o de las partes conducentes de éste, ya se trate de actuaciones ordenadas por la ley o de las transcripciones que, a juicio del notario, sean pertinentes cuando el acto o contrato haya sido precedido de autorización u orden judicial o sea consecuencia de diligencias judiciales o administrativas; de igual manera se procederá en cualquier otro tipo de transcripciones.

Artículo 21. Correcciones.

Es prohibido borrar, raspar, remover, enmendar o cubrir frases, palabras, letras o números. Los testados se harán trazando una línea, pero el texto debe quedar legible. Puede entrerrenglonarse lo corregido o adicionado. Para que las correcciones sean válidas deberán ser salvadas, en su texto original, al final del documento, antes que se estampe la primera firma. Cualquier otra forma de corrección no será válida.

Artículo 22. Minutas.

El notario será responsable de la redacción del documento notarial, aun cuando hubiese recibido minuta de los interesados. Si las partes insistieran en que la redacción del documento se haga conforme a dicha minuta, el notario deberá acceder a tal requerimiento, dejando constancia expresa de esa circunstancia; no obstante, si advirtiera en el respectivo proyecto la posible existencia de una causa de nulidad absoluta, se abstendrá de intervenir y hará saber a las partes el motivo.

CAPÍTULO IV EL PROTOCOLO

Artículo 23. El Protocolo.

El protocolo es la colección ordenada en forma numérica y cronológica como lo establece el Artículo 32, separada por año, de las escrituras matrices y de los documentos que el notario incorpore a la colección, de conformidad con la ley.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Artículo 24. Propiedad.

El protocolo es propiedad del Estado, y el notario, que lo tendrá en custodia, será responsable de su guarda y conservación y deberá mantenerlo en su sede notarial o en el lugar que le autorice la Dirección Nacional del Notariado.

El protocolo no puede ser extraído del poder del notario, sino en los casos previstos en la ley.

Artículo 25. Solicitud de apertura.

El notario deberá solicitar cada año, en cualquier día hábil, la autorización de la Dirección Nacional del Notariado para la apertura del protocolo, cumpliendo con las formalidades que establezca dicha Dirección. La autorización tendrá validez hasta el treinta y uno de diciembre del año que corresponda.

La Dirección aceptará solicitudes de apertura de protocolo a partir del cuarto trimestre del año anterior que corresponda.

Artículo 26. Derecho de apertura.

El notario que obtenga la autorización a que se refiere el artículo anterior, deberá pagar la cantidad que fije la Dirección Nacional del Notariado, en concepto de derecho de apertura del protocolo, cuyo importe pasará a formar parte de los fondos privativos del Organismo Judicial con destino al funcionamiento de la Dirección.

Artículo 27. Razón de apertura.

El protocolo se abrirá el día en que el notario empiece a escriturar, con una razón que éste extenderá en el anverso de la primera hoja, indicando el año en curso, los datos de la resolución de la autorización de la apertura dictada por la Dirección Nacional del Notariado y la identificación del comprobante de pago por concepto del derecho anual de apertura, así como lugar, fecha, firma y sello del notario.

El primer documento que se autorice, se asentará en el reverso de la misma hoja.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Artículo 28. Razón de Cierre.

El protocolo se cerrará el treinta y uno de diciembre de cada año o antes si el notario dejare de escriturar. El cierre se hará por medio de razón que se asentará a continuación del último documento notarial elaborado. La razón indicará el lugar y fecha del cierre y consignará el número total de documentos, de los autorizados, de los cancelados y de los que contengan testamentos o donaciones por causa de muerte; además, número de folios que componen el protocolo, identificación de la última hoja utilizada y las observaciones que considere pertinentes. La razón deberá ser firmada y sellada por el notario.

Artículo 29. Razón de reapertura.

El notario que por cualquier causa hubiere cerrado el protocolo durante el año, podrá abrirlo nuevamente sin cargo alguno; para ello redactará una razón a continuación de la de cierre, conforme a las formalidades que establezca la Dirección Nacional del Notariado. Continuará escriturando con el número correlativo que corresponda.

Artículo 30. Papel de protocolo.

La Dirección Nacional del Notariado autorizará la entrega a los notarios en ejercicio del papel especial de protocolo, en hojas sueltas, en las cantidades que determine dicha Dirección, la que llevará control de la entrega y consignará la identificación de las hojas, así como el nombre, número de registro, firma y sello del notario.

Las hojas de protocolo deberán estar numeradas en su anverso y reverso. Sus otras características, así como lo relativo a su fabricación, mecanismos de seguridad y forma de distribución, serán los que establezca el Reglamento.

Para adquirir papel de protocolo los notarios deberán haber cumplido con las obligaciones previstas en los Artículos 25, 26, 34 y 89. Ningún notario podrá adquirir papel de protocolo en nombre de otro, salvo lo previsto en el numeral 93.5 del Artículo 93 de esta ley.

Artículo 31. Casos de excepción en el uso de papel de protocolo.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Se exceptúa el uso de papel de protocolo, debiendo utilizarse papel simple, en los siguientes casos:

- 31.1. En los documentos notariales que autoricen en el extranjero los notarios residentes en Guatemala, que surtirán sus efectos legales a partir de la fecha en que fueren protocolizados en Guatemala;
- 31.2. En los documentos notariales que autoricen los notarios que sean miembros del personal diplomático o consular a que se refiere el Artículo 91.
- 31.3. Los documentos notariales que autoricen los notarios guatemaltecos residentes en el extranjero, fuera del lugar de su residencia.

Artículo 32. Formalidades en el protocolo.

Además de lo previsto en el Título II, capítulo III de esta ley, en el protocolo deben llenarse las formalidades siguientes:

- 32.1. Los documentos llevarán numeración ordinal correlativa y se asentarán uno a continuación de otro, por riguroso orden cronológico.
- 32.2. La numeración correlativa del papel de protocolo sólo podrá interrumpirse en caso de que se termine la serie correspondiente, lo que se consignará en anotación hecha en el margen superior del primer folio de la nueva serie, indicándose la fecha en que ésta fue adquirida.
- 32.3. Cada documento se iniciará en la primera línea del anverso o reverso de la hoja que corresponda en el protocolo. Los renglones que sobren de la última página en que se autorizó el último documento se inutilizarán por medio de una línea.
- 32.4. El protocolo llevará foliación cardinal, en cifras escritas con tinta indeleble en la esquina superior derecha de la primera plana de cada hoja. El documento protocolizado continuará la foliación cardinal que le corresponda.

Artículo 33. Razón marginal de referencia.

El notario pondrá al margen de una escritura matriz que se modifique razón de haber autorizado otra escritura que la complemente, adicione,

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

aclare, modifique o rectifique; o afecte el acto o contrato en cualquier sentido. Dicha razón deberá aparecer en los testimonios o copias que se expidan.

Si el notario al que se refiere el párrafo anterior es distinto del que autorizó la escritura matriz, o si el protocolo se encuentra en la Dirección, se deberá dar aviso escrito a quien corresponda de cualquiera de las circunstancias indicadas en el párrafo anterior, para que consigne la nota marginal de referencia en la respectiva escritura, debiendo agregar entre los anexos del protocolo el documento que acredite el cumplimiento de esta obligación.

Artículo 34. Índice.

Al finalizar cada trimestre del año, el notario deberá elaborar el índice de los documentos autorizados y de los cancelados, el que se faccionará en papel simple y de garantizada durabilidad, según el Reglamento.

En el encabezado del índice se indicará el nombre del notario y el trimestre que corresponde. Podrán usarse cifras y abreviaturas. El notario entregará copia firmada y sellada del índice a la Dirección Nacional del Notariado, dentro de los veinticinco días hábiles siguientes a la finalización de cada trimestre.

Si el notario no hubiere autorizado ningún instrumento en el trimestre, deberá dar aviso a la Dirección Nacional del Notariado, dentro del plazo antes indicado, haciendo constar esa circunstancia.

Artículo 35. Contenido del índice.

El índice contendrá, respecto de cada documento notarial, la información siguiente:

- 35.1. Número de orden.
- 35.2. Lugar y fecha.
- 35.3. Nombre de los comparecientes y de las personas que éstos hubieren representado, en su caso.
- 35.4. Objeto.
- 35.5. Número de folio de inicio.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

El índice irá fechado, firmado y sellado por el notario quien podrá hacer las observaciones necesarias.

Artículo 36. Anexos.

El notario agregará anualmente, al final del protocolo, la autorización de apertura y los anexos referentes a los documentos que hubiere autorizado, incluyendo los de entrega de testimonios especiales y los avisos de cancelación, copias de los avisos a las oficinas públicas y otros que hubiere dado, comprobantes de entrega de expedientes de jurisdicción voluntaria, y los otros documentos que por ley deba incorporar.

Artículo 37. Empastado.

El notario dispondrá que se empaste el protocolo, en uno o más tomos, dentro de los treinta días hábiles siguientes a su cierre.

Artículo 38. Exhibición.

El protocolo es público. Los documentos que lo integran podrán exhibirse ante cualquier persona que tenga interés comprobado en ellos a juicio del notario, pero siempre en presencia de éste; se exceptúan los testamentos y donaciones por causa de muerte, en los cuales a los otorgantes les corresponde ese derecho de manera exclusiva. A fin de garantizar la secretividad de los actos citados en último término, el notario colocará cubiertas a las hojas en que se consignent los mismos.

Si el notario se negare a exhibir un documento en contra de lo que esta ley establece, la Dirección Nacional del Notariado podrá exigirle la entrega de una copia auténtica; si fuere indispensable la exhibición del original, dicha Dirección notificará al notario, a quien concederá audiencia por veinticuatro horas y, con la contestación de éste o sin ella, ordenará la exhibición en la sede de la Dirección si así procediere, fijando otra audiencia para el efecto.

En las exhibiciones ordenadas judicialmente, el juez dispondrá el lugar, día y modo de la diligencia.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Artículo 39. Rectificación.

Procederá la rectificación del protocolo cuando se hubiere incurrido en los siguientes errores de forma: alterar la numeración cardinal de los documentos, de la foliación, del orden de las hojas conforme a su identificación de origen; dejar hojas en blanco o inutilizarlas.

En estos casos, el notario acudirá a la Dirección del Notariado, la que, al constatar el error, resolverá sobre la rectificación, poniendo razón al margen del documento notarial o folio de que se trate y levantando el acta respectiva, de la que extenderá copia certificada al notario, quien deberá agregarla a los anexos del protocolo.

Artículo 40. Reposición.

Cuando el notario, o un tercero interesado, se entere del extravío, pérdida total o parcial, destrucción o deterioro del protocolo, de inmediato dará aviso a la Dirección Nacional del Notariado, la que ordenará la reposición dentro de los treinta días siguientes, a costa del notario, con base en la información que obtuviere o le fuere presentada, incluyendo testimonios especiales, duplicados que pudieran constar en los Registros, copias legalizadas o testimonios que se hubieren expedido. Recibidas las pruebas, la Dirección resolverá la reposición y, si la declara con lugar, ordenará colocar una copia de los documentos repuestos en el lugar que correspondía a los originales.

Artículo 41. Hojas en blanco.

En cualquiera de los casos del artículo anterior, si se tratare de hojas en blanco o en las que consten actos o contratos sin todas las firmas, la Dirección ordenará publicar, a costa del notario, un aviso en el diario oficial y en otro de reconocida circulación, poniendo el hecho en conocimiento del público. Si quince días después de la última publicación, persistiere la situación irregular, la Dirección dictará la resolución correspondiente, anulando el uso de las hojas y ordenando que en su lugar se incluya certificación de lo actuado. Además, enviará oficios a los registros públicos correspondientes.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

La resolución que se dicte deberá publicarse en la misma forma y condiciones antes establecidas.

Artículo 42. Entrega.

La entrega del protocolo a la Dirección Nacional del Notariado será obligatoria en los casos siguientes: por mandato de la ley; cuando el notario se ausente del país por períodos mayores de un año; por impedimento o suspensión temporal o definitiva del notario; por orden de ocupación o extracción emitida por la Dirección; por orden judicial de secuestro; y por fallecimiento del notario. En este último caso se procederá en la forma que establece el Artículo 44 de esta ley.

El notario deberá entregar empastado el protocolo, con las razones de cierre, índices y anexos, incluyendo las hojas en blanco, y una declaración de esta circunstancia, en la que se consigne la numeración de dichas hojas, las que deberán ser destruidas por la Dirección.

Artículo 43. Ausencia del notario.

El notario que tenga que ausentarse del país por más de treinta días, pero por menos de un año, deberá entregar el protocolo, antes de su salida, en la Dirección Nacional del Notariado, o bien depositarlo en notario hábil; en este último caso deberá darse aviso, firmado y sellado por ambos notarios, a la Dirección, y se indicará el nombre, dirección y número de registro del notario en cuyo poder quede depositado el protocolo, así como la indicación del último instrumento autorizado o cancelado, la identificación de la hoja en que éste estuviere contenido y la numeración de las hojas en blanco.

El comprobante de la entrega o del depósito, o bien la copia del aviso debidamente sellada por la Dirección Nacional del Notariado, será indispensable para que el notario pueda salir del país. Para el efecto, la Dirección General de Migración tendrá una nómina de notarios en ejercicio, la que le proporcionará y actualizará la Dirección Nacional del Notariado, el primer día hábil de cada mes. El notario depositario podrá extender testimonios y suministrar, a quien lo solicite y tenga interés, los informes que le sean requeridos en relación con el protocolo depositado.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Artículo 44. Fallecimiento del notario.

Los herederos, parientes, albacea, administrador, representante de la sucesión hereditaria, empleados o cualquier persona que tuviere en su poder el protocolo, sello o expedientes de procesos de jurisdicción voluntaria en sede notarial, correspondientes a un notario fallecido, están obligados a entregarlos dentro de los treinta días hábiles siguientes al fallecimiento de éste, en la oficina central o subsedes de la Dirección Nacional del Notariado, o en su defecto en el Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil del domicilio del notario fallecido. En este caso, el juez deberá comunicarlo de inmediato a la Dirección.

Si se tratare de expedientes en trámite, la Dirección los entregará al notario que indiquen los interesados.

Se deja a salvo el derecho de los herederos del notario fallecido de cobrar los honorarios y gastos que a éste hubieren correspondido.

Si se produjera el incumplimiento en la aludida entrega por las personas obligadas, el juez de Primera Instancia, a requerimiento de la Dirección Nacional del Notariado o de oficio, hará uso de apremios legales hasta obtener la entrega. Si una vez agotado el procedimiento, no se efectuare la entrega, el responsable incurrirá en los delitos de desobediencia, y de supresión, ocultación o destrucción de documentos, sin perjuicio del derecho que puede ejercitar la Dirección en cuanto a ordenar la ocupación o extracción u obtener orden judicial de secuestro, con el auxilio de la fuerza pública si fuere necesario.

Al asentar la partida de defunción de un notario, los Registradores Civiles deberán dar aviso a la Dirección, dentro de los diez días hábiles siguientes, bajo pena de incurrir en una multa de quinientos quetzales.

CAPÍTULO V FORMALIDADES DE LOS DOCUMENTOS NOTARIALES

Artículo 45. Formalidades generales.

Además de los requisitos o formalidades especiales que la ley establece para ciertos actos y contratos, en los documentos notariales se observarán las siguientes formalidades generales:

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

45. 1. Número de orden del documento y lugar, día, mes y año de su asentamiento en el protocolo, en los casos en que corresponda.
- 45.2. Nombres, apellidos y número de registro del notario.
- 45.3. Nombres, apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación u oficio, domicilio, residencia, lugar y fecha de nacimiento de los comparecientes.
- 45.4. Fe del conocimiento que tenga el notario de las personas que intervienen en el acto o contrato, consignando los datos pertinentes del documento oficial de identidad del que se encuentren provistos los comparecientes. En el caso de representación de personas individuales, el representante deberá declarar los mismos datos personales del representado, para su consignación en el documento.
- 45.5. Identificación de los comparecientes, cuando no fueren del conocimiento del notario. La identificación podrá hacerse:
 - 45.5.1. Por medio del documento oficial de identidad, nacional o extranjero, que tenga fotografía y firma o huella digital; en este último supuesto la huella deberá imprimirse en el documento. Se consignarán los datos pertinentes del documento respectivo.
 - 45.5.2. Por dos testigos que conozcan al compareciente, de quienes el notario deberá consignar similares datos que los proporcionados por los comparecientes. Los testigos serán responsables de la identificación.
 - 45.5.3. Por declaración de las otras personas que intervengan, siempre que sean conocidas del notario y se les imponga de la misma responsabilidad.
 - 45.5.4. Por dos o más de los modos anteriores, cuando el notario lo estime conveniente o así se lo pida alguno de los comparecientes.
- 45.6. Declaración de quienes intervengan de que se encuentran en el libre ejercicio de sus derechos civiles.
- 45.7. Fe del notario de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acreditan la representación legal de quienes intervienen en nombre de otro, describiendo detalladamente en qué consisten esos documentos, consignando todos los datos relativos a su plena individualización, e incluyendo, cuando fuere el caso, los datos concernientes a registros o autorizaciones especiales para el otorgamiento del acto o contrato.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Si este último se autoriza en el extranjero, el notario podrá asociarse de un perito en derecho del lugar del otorgamiento.

- 45.8. Declaración de los comparecientes que intervengan en representación de otra persona, que los títulos justificativos de dicha representación continúan vigentes, que no han sido objeto de restricción o modificación ni existe requisito o condición pendiente de cumplir para el ejercicio de la representación.
- Los representantes de personas individuales deberán declarar que éstas gozan de capacidad legal.
- 45.9. Fe del notario de que las representaciones que se ejercen son suficientes de conformidad con la ley y a su juicio, para el otorgamiento del acto o contrato.
- 45.10. Relación fiel, concisa, clara y precisa del acto o contrato.
- 45.11. Transcripción de las actuaciones ordenadas por la ley o que a juicio del notario sean pertinentes, de conformidad con lo previsto en el Artículo 20 de esta ley.
- 45.12. Fe del notario de haber tenido a la vista los títulos o comprobantes justificativos de los derechos relativos al acto o contrato, asentando los datos de autoría de dichos títulos o comprobantes para su plena individualización, los cuales razonará el notario cuando su contenido sufra modificación en virtud del instrumento que hubiere autorizado.
- 45.13. Fe de haber leído el documento a los interesados o de haberles permitido la lectura; si alguno de los otorgantes fuese totalmente sordo deberá leerlo por sí mismo haciendo constar el notario esta circunstancia.
- 45.14. Advertencia a los comparecientes de los efectos legales del acto o contrato y de lo relativo a presentar el testimonio del documento, cuando proceda, en los registros públicos respectivos, trámite que deberá hacer el propio notario cuando haya sido debidamente expensado.
- 45.15. La ratificación y aceptación de los otorgantes.
- 45.16. Firma de los otorgantes y de las otras personas que hayan intervenido, y firma y sello del notario, precedidos de la expresión "ante mí", sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 55 de esta ley para los documentos que se asienten en el protocolo.
- Si uno o varios de los comparecientes no supieren o no pudieren firmar, pondrán la huella digital de su pulgar derecho y, en su

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

defecto, de otro que especificará el notario, firmando un testigo por cada compareciente o por cada grupo que represente un mismo derecho.

- 45.17. Cuando una persona pueda expresar su voluntad pero esté imposibilitada físicamente de firmar o poner una huella digital, el notario hará constar esa circunstancia y firmarán por ella dos testigos designados por el otorgante, debiendo ser uno de ellos un médico, cuya declaración sobre dicha circunstancia podrá constar en el documento.

Artículo 46. Formalidades esenciales.

Son formalidades esenciales, de carácter general, de los documentos notariales:

- 46.1. El lugar y fecha del asiento en el protocolo.
- 46.2. Los nombres y apellidos de los comparecientes y la constancia del notario de conocerlos o de haberlos identificado por los medios legales.
- 46.3. Razón de haber tenido a la vista los documentos que acreditan la representación de quien comparezca en nombre de otro, y de que tal representación es suficiente conforme a la ley y a juicio del notario para el otorgamiento del acto o contrato.
- 46.4. La intervención de intérpretes o de testigos en los casos que así lo ordena la ley.
- 46.5. La relación del acto o contrato y sus características.
- 46.6. Las firmas de quienes intervinieron según el documento, o la impresión digital en su caso, y la fecha en la que fueron puestas de conformidad con el Artículo 55 de esta ley.
- 46.7. La firma de autorización y sello del notario.

Artículo 47. Omisión de formalidades esenciales.

La omisión de las formalidades esenciales en los documentos notariales causa la nulidad de éstos. La nulidad sólo podrá plantearse por quien tenga interés directo y legítimo. Para deducir responsabilidad al notario por la nulidad de un documento, deberá emplazársele en los términos que prescribe el Artículo 7 de esta ley.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Artículo 48. Errores u omisión de formalidades no esenciales.

Los errores o la omisión de formalidades no esenciales otorgan derecho a la parte interesada para solicitar al notario que los subsane, mediante la escritura correspondiente. Si el notario se negare se pondrá el hecho en conocimiento de la Dirección Nacional del Notariado, con el fin de que, establecida la veracidad de la denuncia, se conmine por escrito al notario para que, en un plazo no mayor de cuarenta y ocho horas, se pronuncie sobre la denuncia o proceda a subsanar las omisiones o errores.

Si persistiere la negativa injustificada, la Dirección designará a otro notario para realizar la subsanación, corriendo a cargo del notario renuente el pago de los honorarios y gastos, sin perjuicio de una sanción pecuniaria acorde con la gravedad de la omisión. Si el notario hubiere fallecido se seguirá el mismo procedimiento, pero sin imponer multa alguna; los honorarios y gastos serán cubiertos por la Dirección, que podrá repetir contra la mortuoria.

Artículo 49. Adiciones.

Antes que el documento haya sido firmado por alguno de los comparecientes, éstos podrán pedir al notario que se hagan las adiciones o variaciones que estimen convenientes, en cuyo caso el notario asentará los cambios y hará constar que les dio lectura y que explicó a los comparecientes las consecuencias legales de los mismos.

Artículo 50. Autorización.

Después de que haya sido firmado por todos los comparecientes, el documento no se podrá cancelar ni ser objeto de adiciones o correcciones, y el notario debe autorizarlo con su firma y sello precedidos por la razón "ante mí".

Artículo 51. Constancia de fe.

No es preciso que el notario exprese que da fe en cada declaración, estipulación o cláusula del documento. Será suficiente que lo haga al principio o al final del mismo, empleando una fórmula adecuada.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Artículo 52. Intérpretes.

Cuando en el documento notarial comparezcan una o más partes que ignoren el idioma español, intervendrá por cada una de ellas un intérprete que, de preferencia, deberá ser traductor jurado. Si todas las partes están de acuerdo, el mismo intérprete podrá traducir a varias personas, siempre que no haya conflicto de intereses entre ellas. Asimismo, en casos especiales, si fuere necesario, intervendrá un intérprete gestual o un lector o escritor de braille. El intérprete declarará en el documento, bajo su responsabilidad, la absoluta conformidad del texto con la traducción. Si el intérprete no supiere o no pudiere firmar pondrá la huella digital de su dedo pulgar derecho o de otro que indique el notario, y firmará a su ruego un testigo. Los parientes del notario, dentro de los grados de ley, no podrán ser intérpretes.

Artículo 53. Testigos.

En los actos o contratos en que la ley exija la intervención de testigos, el notario deberá asegurar la presencia de ellos e identificarlos con los mismos datos personales y documentos que se exigen en el caso de los otros comparecientes. No podrán ser testigos:

- 53.1. Los civilmente incapaces.
- 53.2. Los sordos, mudos o ciegos.
- 53.3. Los parientes del notario o de los otorgantes, dentro de los grados de ley.
- 53.4. Los que tengan interés en el acto o contrato.
- 53.5. Los que no sepan leer y escribir o no hablen o no entiendan el idioma español.
- 53.6. Los que hayan sido condenados por delito contra la fe pública o por falso testimonio.

El testigo que tenga uno de los impedimentos anteriores y no lo haga del conocimiento del notario habiendo sido advertido por éste, cometerá delito de falso testimonio

Artículo 54. Cargas.

En todo acto o contrato el otorgante que se obligue o transmita un bien, derecho u obligación, hará constar de manera expresa si sobre los mismos

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

existen gravámenes o limitaciones de cualquier naturaleza, que puedan afectar los derechos de los otros otorgantes. El notario deberá advertir al declarante sobre las responsabilidades civiles y penales en que incurrirá si así no lo hiciere o si, haciéndolo, faltare a la verdad.

Artículo 55. Exigencias en cuanto a la firma.

Cuando el documento no sea firmado en el mismo acto por todos los comparecientes, siempre que, por su naturaleza o por disposición legal, no se deba firmar en un solo acto, el notario irá asentando la razón "ante mí", seguida por su firma, a medida que firmen los comparecientes; en cada caso se expresará la fecha. No se podrá modificar el texto después de estampada la primera firma.

Si dentro del plazo de treinta días posteriores al asiento del documento no se completan las firmas, el notario procederá a la inmediata cancelación del instrumento.

Artículo 56. Cancelación.

Cuando el notario cancele un instrumento pondrá al final del mismo la razón y la fecha de la cancelación, y su firma y sello.

De todas las cancelaciones se dará aviso a la Dirección Nacional del Notariado dentro del plazo fijado en el Artículo 89, informando la causa de la cancelación y el número y la fecha del documento cancelado, del que no se podrá extender testimonios ni copias de ninguna clase.

TÍTULO III

FORMALIDADES ESPECIALES PARA DETERMINADOS DOCUMENTOS CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 57. Formalidades especiales y esenciales de la escritura pública de testamento abierto o de donación por causa de muerte.

Además de las formalidades generales y esenciales que establece esta ley, el otorgamiento de la escritura de testamento común abierto o de donación por causa de muerte, así como el que corresponde a la escritura que amplíe, modifique o revoque a la anterior, deben.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

satisfacer las siguientes formalidades especiales, las que tendrán el carácter de esenciales:

- 57.1. Comparecencia simultánea ininterrumpida, o sea coincidencia en el mismo acto, tiempo y lugar de las personas intervinientes, desde el inicio hasta la finalización del acto.
- 57.2. Ubicación precisa del sitio del otorgamiento.
- 57.3. Hora de inicio y de finalización.
- 57.4. Presencia de dos testigos instrumentales.
- 57.5. Declaración del notario, en la cual se asiente que, a su juicio, el testador goza de capacidad mental.
- 57.6. Que el otorgante exprese por sí mismo su voluntad.
- 57.7. Que el documento se lea en voz alta de manera clara y comprensible, por el otorgante o la persona que él designe; y que al final de cada cláusula se compruebe por el notario, viendo y oyendo al otorgante, si lo contenido en dicha cláusula es la expresión fiel de la voluntad de este último.
- 57.8. Si el otorgante no habla o no entiende suficientemente el idioma español, deberán intervenir dos intérpretes, elegidos por él, para traducir sus disposiciones en el momento de expresarlas.
- 57.9. Que el otorgante, los testigos, los intérpretes en su caso y el notario, firmen el documento en el mismo acto. Si el otorgante no sabe o no puede firmar, se procederá en la forma establecida en el numeral 45.16 del Artículo 45 de esta ley.

Artículo 58. Casos especiales.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, en los casos a que se refiere el presente artículo se observará los siguientes requisitos:

- 58.1. Si el otorgante fuere ciego deberá intervenir un testigo adicional y el documento deberá ser leído en voz alta dos veces: la primera, por el notario; y la segunda, por uno de los testigos elegido por el otorgante. Esa circunstancia deberá ser consignada en el documento.
- 58.2. Si el otorgante fuere sordo deberá leer él mismo el documento, con voz inteligible, en presencia del notario y los testigos, lo que se hará constar. Si no supiere leer o no pudiere hacer la lectura en voz alta, designará un intérprete gestual para que lea el documento y le exponga su

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

contenido. El notario hará constar la forma en que el otorgante manifestó que comprendió el contenido del documento.

- 58.3. Si el otorgante fuere mudo manifestará, por escrito, su consentimiento con los términos del documento, y en caso de no saber o no poder escribir designará un intérprete gestual para que lo lea y le exponga su contenido, lo que el notario hará constar en el documento.

Artículo 59. Formalidades del testamento cerrado.

En el testamento cerrado se observarán, en lo aplicable, las solemnidades pertinentes previstas para el testamento común abierto y, además, las siguientes:

- 59.1. Las hojas de papel en las que esté escrito el testamento se pondrán dentro de una plica, de manera que no puedan extraerse sin romper la cubierta.
- 59.2. En presencia del notario y los testigos, y de los intérpretes en su caso, el testador manifestará que el pliego que presenta contiene su testamento, que está escrito y firmado por él o escrito por mano ajena, o bien que, por no poder firmar, lo ha hecho a su ruego otra persona, cuyo nombre expresará.

Sobre la cubierta del testamento el notario extenderá el acta del otorgamiento, en la que dará fe de que se observaron las formalidades legales.

Cuando se haya concluido, el acta será leída y firmada por el testador, los testigos, los intérpretes si los hubiere y será autorizada por el notario con su sello y firma.

Si el testador no puede firmar, pondrá su impresión digital, y un testigo más, designado por él mismo, firmará a su ruego.

Artículo 60. Impedimentos.

No pueden otorgar testamento cerrado:

- 60.1. El ciego.
- 60.2. La persona que no sabe leer y escribir.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

- 60.3. Quienes no puedan hablar, pero sí escribir, podrán otorgar testamento cerrado, pero tanto éste como el acta de la plica deberán ser escritos y firmados de puño y letra del testador.

Artículo 61. Transcripción.

El notario entregará al testador el testamento cerrado ya autorizado, después de transcribir en el protocolo, con el número y en el lugar que le corresponde, el acta de otorgamiento. Este instrumento también será firmado por todos los que intervinieron en el acto.

Artículo 62. Conservación y presentación.

El testador podrá conservar en su poder el testamento cerrado, encomendar su guarda a persona de su confianza o depositarlo en poder del notario. Cualquiera de estas tres circunstancias se hará constar en el acta.

El notario, o la persona que tenga en su poder el testamento cerrado, deberá presentarlo al juez competente al enterarse del fallecimiento del testador o, a más tardar, dentro de los diez días posteriores a la fecha de su conocimiento de tal circunstancia, bajo pena de responder por los daños y perjuicios que pudieran derivarse del incumplimiento de esta norma.

Artículo 63. Avisos.

El notario que autorice un testamento común abierto, una donación por causa de muerte o un documento que los amplíe, modifique o revoque, está obligado a dar aviso escrito al Registro General de la Propiedad y a la Dirección Nacional del Notariado, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se autorizó el documento, consignando los datos expresados en el artículo siguiente. Si se tratare de un testamento cerrado, el notario dentro del mismo plazo enviará copia íntegra del acta de otorgamiento.

En caso de ampliación, modificación o revocación de un testamento abierto o de una donación por causa de muerte, autorizados por otro

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

profesional, el notario también deberá dar aviso a este último, dentro del plazo antes señalado, para que efectúe la correspondiente anotación marginal de referencia en el protocolo.

Artículo 64. Registro Notarial de Testamentos y de Donaciones por causa de Muerte.

Se establece el Registro Notarial de Testamentos y Donaciones por causa de Muerte, adscrito a la Dirección Nacional del Notariado, en el cual se hará constar:

- 64.1. Los nombres, apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación u oficio, domicilio, residencia, lugar y fecha de nacimiento del otorgante y los datos de su documento oficial de identidad. Todos estos datos se incluirán en el libro de testamentos comunes abiertos y donaciones por causa de muerte.
- 64.2. Lugar, sitio y fecha del otorgamiento; hora de inicio y de finalización; folio o folios que correspondan al protocolo, así como el número y registro de las hojas de papel en que se hubiere extendido el documento; y la constancia de que firmó el otorgante, o la persona que lo hubiere hecho a su ruego.
- 64.3. En el caso de testamento cerrado una copia íntegra del acta que protege el testamento, la que se incluirá en el libro de testamentos cerrados.
- 64.4. En el caso de testamento especial, los datos a que se refiere el inciso 64.1 de este artículo, en lo que fueren aplicables, los cuales se incluirán en el libro de testamentos especiales.
- 64.5. La ampliación, modificación, revocación, nulidad o insubsistencia de testamentos comunes abiertos o donaciones por causa de muerte.

Cuando el otorgante haya fallecido, el notario a solicitud de parte interesada, presentará a la Dirección Nacional del Notariado y al Registro General de la Propiedad el testimonio del documento y certificación del acta de defunción, para que se anote en los libros respectivos y se razone el testimonio.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Artículo 65. Formalidades de la escritura constitutiva de sociedad.

La escritura constitutiva de sociedad, además de los requisitos necesarios para la validez del instrumento y de las estipulaciones propias de la clase a que corresponda establecidas en la ley específica, deberá indicar:

- 65.1. La clase de la sociedad.
- 65.2. La razón o denominación social y el nombre comercial si lo tuviere.
- 65.3. El domicilio.
- 65.4. La enunciación precisa del objeto social.
- 65.5. El plazo de la sociedad.
- 65.6. El capital social y la parte que aporta cada socio, detallando los bienes respectivos.
- 65.7. La forma en que los socios adoptarán las decisiones.
- 65.8. Los órganos de administración y sus atribuciones.
- 65.9. El órgano de fiscalización, según la naturaleza de la sociedad.
- 65.10. Las bases para la liquidación y división del haber social.
- 65.11. Referencia expresa de que las diferencias que surjan entre los socios o entre éstos y la sociedad se someterán a arbitraje y, en su caso, el número de árbitros y la forma de nombrarlos.

Artículo 66. Formalidades especiales de la escritura constitutiva de sociedad anónima o de sociedad en comandita por acciones.

Además de lo establecido en el artículo anterior, la escritura de constitución de sociedad anónima o de sociedad en comandita por acciones deberá indicar:

- 66.1. El capital autorizado y el número y valor de las acciones en que éste se divide y, en su caso, la clase y serie de las acciones.
- 66.2. El monto del capital suscrito y pagado al constituirse la sociedad.
- 66.3. Las preferencias en la distribución de utilidades o dividendos.
- 66.4. La amortización de las distintas clases o series de acciones si las hubiere y las primas que se estipularen.
- 66.5. Las atribuciones de las asambleas generales de accionistas.

Artículo 67. Formalidades especiales de la escritura de constitución de hipoteca por cédulas.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

La escritura de constitución de hipoteca por cédulas deberá contener los requisitos especiales siguientes:

- 67.1. El monto del crédito representado por las cédulas, el de cada serie si se emitieron varias y el de los cupones en su caso.
- 67.2. El valor y número de las cédulas que se emiten y la serie a la que pertenecen.
- 67.3. El tipo de interés y el tiempo y lugar del pago.
- 67.4. El plazo del pago o de los pagos sucesivos en caso de hacerse amortizaciones graduales.
- 67.5. La identificación de la finca o fincas hipotecadas y el monto del avalúo practicado.
- 67.6. La designación de la persona o institución que, como agente financiero, esté encargada del servicio de la deuda y del pago de intereses, comisiones y amortizaciones.
- 67.7. El nombre de la persona o institución a cuyo favor se hace la emisión, en caso de que no se hiciere al portador, y el del propio otorgante si la emisión fuere a su favor.
- 67.8. La especificación de las emisiones anteriores, si las hubiere.
- 67.9. El orden de preferencia para su pago, si se hubiere establecido, y si la emisión se dividiere en series.

Artículo 68. Escritura de constitución de régimen de propiedad horizontalmente dividida.

La escritura por la que se constituya un régimen de propiedad horizontalmente dividida, además de los requisitos de toda escritura, deberá cumplir los siguientes:

- 68.1. Constancia de que el propietario ha expresado en forma precisa su voluntad de someter el inmueble a dicho régimen.
- 68.2. Ubicación, extensión y colindancias del terreno.
- 68.3. Descripción total del edificio, así como de todos los servicios de que disponga.
- 68.4. Descripción de cada piso, de las áreas comunes y las de comunidad limitada.
- 68.5. Descripción de cada finca filial, indicando el número que le corresponda en el régimen, área, colindancias y cualquier otro dato que, a juicio del notario, sea conveniente para su plena identificación.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

- 68.6. Valor estimado de todo el inmueble y de cada finca filial. En este último estará incluido el porcentaje que le corresponda del valor de los elementos comunes y de comunidad limitada, según la extensión de la finca filial.
- 68.7. Indicación del destino que se dará a cada finca.
- 68.8. Un Reglamento de Copropiedad y Administración que deberá contener, como mínimo, lo siguiente:
 - 68.8.1. Relación de los derechos, obligaciones y prohibiciones de los propietarios, inquilinos y ocupantes.
 - 68.8.2. Regulación de las relaciones recíprocas de vecindad y de convivencia.
 - 68.8.3. Forma de determinar la contribución que cada propietario aportará a los gastos comunes de administración, mantenimiento, reparación, servicios generales, primas de seguros y cualesquiera otros.
 - 68.8.4. Manera de constituir la mayoría y el modo de votación, ya fuere ésta por área, valor o cualquier otro método.
 - 68.8.5. Inserción, en caso de inscripción definitiva, de la constancia del estado en que se encuentra la construcción, constancia que deberá ser extendida por la respectiva municipalidad o por el profesional director de la obra.

TÍTULO IV ACTAS NOTARIALES

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 69. Definición.

Acta notarial es el documento público original en el cual el notario, por disposición de la ley o a solicitud de parte interesada, hace constar, ante su fe, uno o varios hechos presenciados por él, o bien circunstancias que le constan.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

También podrá consignar en acta notarial los actos y declaraciones propios de los expedientes relacionados con asuntos de jurisdicción voluntaria que se tramiten en la sede notarial.

Las actas notariales se faccionarán en papel simple que garantice su durabilidad, según el Reglamento.

Artículo 70. Formalidades.

Además de las formalidades propias de la clase a que corresponda, establecidas por la ley respectiva, el acta notarial deberá contener los siguientes datos:

- 70.1. Lugar, fecha y hora de inicio y de finalización.
- 70.2. Nombres, apellidos y número de registro del notario.
- 70.3. Nombres, apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación u oficio y domicilio del requirente y de las otras personas que intervengan.
- 70.4. Fe de conocimiento del requirente o su identificación cuando no fuere del conocimiento del notario, en la forma establecida en el numeral 45.5 del Artículo 45 de esta ley.
- 70.5. Relación fiel, concisa, clara y precisa del acto, declaración, hecho o circunstancia que se haga constar en el acta.
- 70.6. Indicación, cuando proceda, de la persona a quien se entregue el acta original.
- 70.7. Firma del requirente y de los otros intervinientes que deseen hacerlo, procediéndose en la forma establecida en el numeral 45.16 del Artículo 45 de esta ley. El notario autorizará el acta aun cuando no sea firmada por ninguna de las personas antes mencionadas, salvo que la ley específica indicare lo contrario o la naturaleza del acta así lo requiriere.

Al pie del acta el notario dejará constancia de haberla registrado en el índice de actas notariales y de haber incorporado una copia, como anexo del protocolo, tal y como se establece en el Artículo 72.

Las disposiciones de esta ley relativas a las formalidades generales de los documentos notariales serán aplicables a las actas, en cuanto sean compatibles según la naturaleza de éstas.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Salvo el acta inicial, las demás actas que por su naturaleza conformen un expediente de jurisdicción voluntaria en sede notarial o de mediación, únicamente satisfarán los requisitos anteriores que sean aplicables según el caso.

Todas las hojas del acta notarial deberán ser numeradas, firmadas y selladas por el notario, haciéndose constar esta circunstancia.

Artículo 71. Contenido.

Además de los actos, declaraciones, hechos o circunstancias que permita la ley, el notario podrá hacer constar en acta notarial lo siguiente:

- 71.1. Notificaciones, emplazamientos, interpelaciones, requerimientos, protestos, inventarios, entrega de documentos y cualesquiera otros actos y diligencias en los que el notario pueda ejercer su función conforme a la ley.
- 71.2. La existencia, identidad y reconocimiento de personas identificadas por el notario.
- 71.3. Cualesquiera hechos materiales.
- 71.4. En general, toda clase de actos, hechos o circunstancias, positivos o negativos; estados y situaciones que guarden las personas y cosas que puedan ser apreciadas objetivamente; y todos los otros asuntos en los que el notario pueda intervenir por mandato legal.

Para intervenir en las diligencias mencionadas en este artículo, cuando así proceda por la naturaleza de las mismas, el notario deberá identificarse previamente y explicar el motivo de su presencia en el lugar.

Artículo 72. Índice de actas.

El notario llevará un índice numérico de las actas notariales por él faccionadas, en un libro que para el efecto le proporcionará y autorizará a su costa la Dirección Nacional del Notariado. En el índice, en la misma fecha de terminación de cada una de las actas, el notario asentará además el nombre del requirente; el lugar, fecha y hora del inicio y finalización del acta; un breve resumen del contenido de ésta, y al final pondrá su firma y sello. El cumplimiento de lo anterior será indispensable para la certeza y eficacia del acta.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Se exceptúan del registro en el índice las actas que correspondan a expedientes de jurisdicción voluntaria en sede notarial y de mediación.

TÍTULO V AUTÉNTICAS, LEGALIZACIONES Y PROTOCOLIZACIONES

CAPÍTULO I AUTÉNTICAS Y LEGALIZACIONES

Artículo 73. Auténtica de firma.

El notario podrá autenticar firmas que hayan sido puestas o sean reconocidas en su presencia.

La razón de la auténtica de firmas contendrá los siguientes datos: lugar y fecha; nombres, apellidos y número de registro del notario; nombres de los signatarios y su identificación por los medios establecidos en esta ley; fe de que las firmas son auténticas, en virtud de haber sido puestas o reconocidas en presencia del notario; firma de los signatarios y de los testigos si los hubiere; firma y sello del notario, precedidos por la razón "ante mí".

Las hojas anteriores a la última también deberán firmarse y sellarse por el notario, haciéndose constar esta circunstancia. Si la auténtica se faccionare o finalizare en hoja separada del documento, en la razón se incluirá una relación de éste.

Artículo 74. Firmas puestas a ruego del obligado.

La persona que no supiere o no pudiese firmar pondrá su impresión digital al pie de la razón de la auténtica, y otra persona designada por ella comparecerá para firmar a su ruego, dejando el notario constancia de la causa del impedimento.

Para el caso de reconocimiento de firma, será suficiente la concurrencia del obligado, lo que hará constar el notario.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Artículo 75. Otras auténticas.

Asimismo, el notario podrá legalizar, entre otros instrumentos, fotocopias, fotostáticas, microfilmaciones, fotografías, disquetes, videocasetes, videos, grabaciones de imágenes y de sonido, así como copias obtenidas por medios magnéticos, electrónicos o cualquier otro en que se reproduzcan uno o varios documentos, siempre que dichas copias sean procesadas o reproducidas del original, en presencia del notario.

Artículo 76. Límite de responsabilidad.

La auténtica no prejuzga acerca de la validez del documento respectivo ni de la capacidad o personería de los signatarios o firmantes.

CAPÍTULO II PROTOCOLIZACIONES

Artículo 77. Documentos que deben protocolizarse.

El notario deberá protocolizar, por sí y ante sí, los siguientes instrumentos:

- 77.1. Los poderes, mandatos y los documentos provenientes del extranjero que deban inscribirse en los registros públicos.
- 77.2. Los documentos o diligencias que ordene la ley o tribunal competente.
- 77.3. Las actas notariales en las que se haga constar la celebración y resoluciones de las asambleas generales de accionistas o de socios, así como las aprobadas por los consejos de administración y juntas directivas, en su caso.

En los casos del numeral 77.1., las autoridades actuarán con base en los respectivos testimonios, debidamente registrados.

Artículo 78. Protocolización optativa.

El notario podrá protocolizar:

- 78.1. Los documentos privados cuyas firmas hubieren sido legalizadas, si comparece la persona a cuyo favor se suscribieron dichos documentos.
- 78.2. Los documentos privados sin reconocimiento o legalización de firmas, si comparecen todos los otorgantes.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Artículo 79. Requisitos tributarios.

Al momento de protocolar el documento o al extender el testimonio, el notario dará fe que el impuesto que corresponda está pagado según lo que establezcan las normas tributarias aplicables.

Artículo 80. Formalidades.

El instrumento de protocolización, además de las formalidades generales que correspondan, contendrá:

- 80.1. El número que corresponda al instrumento y el lugar y la fecha de su asiento en el protocolo.
- 80.2. Los nombres de los solicitantes, o en su caso la transcripción de la resolución judicial o de la mención del documento o diligencia, indicando el número de hojas correspondiente y el lugar que ocupa en el protocolo, según la foliación y los números que correspondan a la primera y última hojas.
- 80.3. La firma de los solicitantes, en su caso, así como la firma y sello del notario.

Artículo 81. Cláusula de Protocolización.

Cuando en una escritura pública se acuerde la protocolización de documentos, la respectiva cláusula contendrá los requisitos a los que se refieren los artículos anteriores.

En lo que corresponda, se deberán dar los avisos necesarios a la autoridad competente.

TÍTULO VI TESTIMONIOS

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 82. Testimonio.

El testimonio es la copia fiel de la escritura matriz extendida en hojas numeradas, selladas y firmadas por el notario autorizante o por el que deba sustituirlo. Al final del mismo se dará fe de que lo copiado o transcrito es exacto al original, se indicará el número de hojas de que

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

consta el testimonio, los nombres de la persona o personas a quienes se extiende y el lugar y la fecha en que se compulse.

Si el testimonio se extendiere por mandato judicial, se insertará la resolución que así lo ordenare.

Artículo 83. Facultad para extender testimonios.

El testimonio podrá extenderse por el notario que faccionó la escritura matriz, por el que lo tenga en depósito temporal, por el designado judicialmente, o por funcionario público autorizado por ley para ello. En cada caso, quien extienda el testimonio deberá indicar la calidad con la que así procede.

Artículo 84. Formas de reproducción.

El testimonio podrá reproducirse, del original, por cualquier medio de impresión o reproducción mecánico, electrónico, fotográfico, fotostático o cualquier otro que reproduzca fielmente el original.

Queda prohibido expedir testimonios transcritos en cualquier forma, cuando el acto o contrato esté sujeto a inscripción en los registros públicos.

Artículo 85. Testimonio de protocolizaciones.

Los documentos protocolizados se considerarán parte de las escrituras respectivas y, en consecuencia, se insertarán en el testimonio. Si el documento protocolizado contuviere planos, se acompañará al testimonio una copia adicional de ellos, con una razón en que se les identifique plenamente, firmada y sellada por el notario.

Artículo 86. Obligatoriedad.

El notario está obligado a extender testimonio a los otorgantes, sus herederos, cesionarios y a cualquier persona que lo solicite. El notario podrá negarse a extender el testimonio si no se le han cancelado sus honorarios y los gastos de autorización del instrumento, y si no se le han

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

anticipado los gastos de expedición del testimonio, todo ello conforme a arancel.

Artículo 87. Testimonio de testamentos y donaciones por causa de muerte.

Mientras viva el otorgante de un testamento o donación por causa de muerte, sólo a él podrá extenderse testimonio o copia del instrumento.

Artículo 88. Negativa a extender testimonio.

Si el notario se negare a extender el testimonio, el juez de Primera Instancia del domicilio del notario, previa audiencia a éste por dos días para que exponga las razones que tuviere para negarse, dictará la resolución que procede; y si ésta fuere en el sentido de ordenar que se compulse el testimonio y el notario no obedeciere, al estar firme la resolución, ordenará la ocupación temporal del protocolo y designará al notario que deberá extenderlo. Los gastos y honorarios que en tal caso se causen, correrán por cuenta del notario renuente.

Artículo 89. Testimonio especial.

De cada escritura pública que autorice, el notario deberá enviar a la Dirección Nacional del Notariado testimonio especial, lo que hará dentro de los veinticinco días hábiles siguientes a su autorización.

Cuando se trate de testamentos o donaciones por causa de muerte, así como de las modificaciones o revocaciones de estos instrumentos, el testimonio se entregará en plica firmada y sellada por el notario, expresando en la misma el número de orden, lugar, fecha, hora y objeto del instrumento, nombres del otorgante, así como el número y registro de las hojas de papel de protocolo en las que se haya extendido el instrumento.

Artículo 90. Copia simple legalizada.

El notario podrá extender copias simples legalizadas de las escrituras matrices, cumpliendo con los requisitos establecidos en el Artículo 82 y por los medios señalados por el Artículo 84, ambos de esta ley.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

TÍTULO VII EJERCICIO PERMANENTE DEL NOTARIADO EN EL EXTRANJERO

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 91. Régimen específico.

El ejercicio profesional permanente de los notarios guatemaltecos que residan en el extranjero, que no tengan impedimento legal en el país de su residencia para ejercer su profesión, queda sujeto al régimen específico que se establece en el presente capítulo.

Igualmente queda sometido a dicho régimen el ejercicio profesional de los miembros del personal diplomático y de los cónsules y vicecónsules acreditados en el extranjero, que sean guatemaltecos notarios hábiles.

Los que no pertenezcan a dicho personal, podrán ejercer circunstancial y ocasionalmente en cualquier otro lugar fuera del territorio guatemalteco.

Artículo 92. Actuación notarial.

Los notarios a que se refiere el artículo anterior sólo podrán hacer constar hechos que presencien y circunstancias que les consten, y autorizar actos y contratos que deban surtir efectos en la República de Guatemala.

Los notarios que sean miembros del personal diplomático y consular, podrán atender en el lugar en que se encuentre la sede de las respectivas representaciones.

Artículo 93. Registro.

El notario que desee practicar su profesión en el exterior, en forma permanente, deberá solicitar previamente que se le inscriba en el Registro de Notarios que ejercen en el extranjero. En este Registro, que se llevará en la Dirección Nacional del Notariado, el notario deberá cumplir los siguientes requisitos:

- 93.1. Acreditar que es notario hábil y que no se encuentra comprendido en ninguno de los casos de impedimento

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

establecidos en los Artículos 10 y 11 de esta ley. Los funcionarios diplomáticos y consulares deberán comprobar, además, esa calidad.

- 93.2. Depositar en la Dirección, el protocolo correspondiente al tiempo en el que hubiere ejercido su profesión en Guatemala.
- 93.3. Indicar, en forma precisa, la dirección, teléfono, fax y cualquier otro medio electrónico o similar que facilite la comunicación con su oficina y los del apoderado al que se refiere el inciso 93.5. de este artículo.
- 93.4. Indicar la fecha en que iniciará el ejercicio profesional.
- 93.5. Comprobar que ha designado a un notario, con domicilio en Guatemala, como apoderado especial, con facultades amplias para recibir notificaciones y emplazamientos judiciales y para representarlo en cualquier asunto relacionado con las responsabilidades inherentes al ejercicio de su profesión en el exterior incluyéndose la autorización para adquirir, en nombre de su mandante, papel de protocolo. El mandato, deberá ser aceptado expresamente, no podrá renunciarse ni podrá ser revocado a menos que se hubiere designado otro apoderado. En caso de sustitución, el apoderado sustituto deberá reunir las mismas calidades del original.
- 93.6. Expresar su aceptación de que, en tanto no se avise por escrito el cambio de dirección, serán válidas, surtirán todos sus efectos y se tendrán por bien hechas las notificaciones y comunicaciones, así como los requerimientos y las citaciones de carácter administrativo que se hagan en las direcciones registradas, salvo las relativas a las responsabilidades civiles, las que podrán efectuarse directamente o por medio del apoderado a que se refiere el inciso anterior.
- 93.7. Aceptar la obligación de informar, por escrito, sobre el cese temporal o definitivo del ejercicio de la profesión o el cambio de dirección.
- 93.8. Demostrar que ha adquirido, por sí o por medio de su apoderado, papel de protocolo.
- 93.9. Cumplir con cualquier otro requisito que establezca la Dirección Nacional del Notariado.

Artículo 94. Cambio de país y de dirección.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

El cambio del país de residencia deberá notificarse por escrito a la Dirección Nacional del Notariado en un plazo no mayor de quince días y, en cualquier caso, antes de principiar a ejercer la profesión en el otro país, proporcionando la nueva dirección, teléfono u otras señas para su localización. En la misma forma se procederá cuando el cambio se haga dentro del país original.

Cuando el notario cambie de país de residencia, deberá depositar en la Dirección el protocolo correspondiente a los actos autorizados en el país de su anterior residencia, previo a que se le extienda la autorización para ejercer en otro país.

Artículo 95. Formalidades y eficacia.

En los actos o contratos que autoricen los notarios a los que se refiere el presente título, así como en las actas notariales que ellos levanten, se observarán las formalidades generales y especiales que para cada documento establece esta ley. En todos esos casos, sin embargo, deberá indicarse además el número de inscripción que corresponde al notario en el Registro, según el Artículo 93.

Las actas notariales se extenderán en papel simple o similar, y para que produzcan efectos como documentos notariales deberán ser protocolizadas por el notario autorizante o por otro notario guatemalteco, lo cual puede hacerse a requerimiento del interesado o de cualquier otro portador del documento.

Artículo 96. Obligaciones.

El notario que ejerza en el extranjero cumplirá con las obligaciones y deberes que la ley impone a todos los notarios, pero en el cómputo de los plazos gozará del término de la distancia, lo que, en cada caso, deberá fijar la Dirección Nacional del Notariado al autorizar el registro a que se refiere el Artículo 93.

Artículo 97. Testimonios especiales y avisos.

Los testimonios especiales y los avisos notariales se remitirán por correo expreso, por correo ordinario, o por cualquier otro medio, electrónico o

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

similar, pero en todos los casos debe existir aviso de recepción. El notario incorporará este aviso a los anexos de protocolo.

Artículo 98. Entrega de protocolo.

La entrega de protocolo establecida en el Artículo 42 de esta ley se hará personalmente por el notario, y si ello no fuere posible se enviará por correo expreso, junto con el correspondiente aviso de recepción; el notario deberá conservar en su poder una copia íntegra y fiel del protocolo y de los documentos adicionales que se hubieren remitido. Sin perjuicio de lo anterior, los funcionarios diplomáticos y consulares que ejerzan el notariado podrán remitir el protocolo por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 99. Envío de documentos.

Si el notario asumiere la responsabilidad de remitir copias de documentos notariales a la República de Guatemala, debe hacerlo por correo expreso u ordinario, y en ambos casos deberá acompañarse aviso de recepción.

Artículo 100. Domicilio legal.

En los procesos incoados por responsabilidad civil, el notario que ejerza en el extranjero se entenderá domiciliado en la República de Guatemala, y mientras no comparezca al juicio estará representado por el apoderado instituido conforme el numeral 93.5 del Artículo 93 de esta ley.

Artículo 101. Prohibiciones.

A los notarios que residan y practiquen su profesión en el extranjero se prohíbe autorizar los actos siguientes:

- 101.1. Matrimonios.
- 101.2. Asuntos de jurisdicción voluntaria en sede notarial, con excepción de la identificación de personas.
- 101.3. Procesos sucesorios.
- 101.4. Actas notariales relacionadas con saldos deudores registrados en contabilidad que no se lleve en Guatemala.
- 101.5. Notificaciones judiciales.
- 101.6. Subastas.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Los actos anteriores tampoco podrán ser autorizados, en el extranjero, por notarios que residan y ejerzan su profesión en el territorio nacional.

Artículo 102. Plan de prestaciones.

Los notarios a que se refiere el presente título, contribuirán al plan de prestaciones del Colegio Profesional mediante pago directo a la Tesorería del Colegio, pago que se podrá efectuar por giro, transferencia bancaria o por cualquier otro medio de pago idóneo, el que se acreditará con fotocopia firmada y sellada por el notario del comprobante respectivo, la que el notario debe adjuntar a cada testimonio especial o por el procedimiento que establezca el Colegio.

TÍTULO VIII ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE LA FUNCIÓN NOTARIAL DIRECCIÓN NACIONAL DEL NOTARIADO

CAPÍTULO I DIRECCIÓN NACIONAL DEL NOTARIADO

Artículo 103. Creación y sede.

La Dirección Nacional del Notariado es una dependencia de la Corte Suprema de Justicia y estará a cargo de un Director. Tendrá su sede en la ciudad de Guatemala y podrá establecer delegaciones regionales o departamentales.

Artículo 104. Finalidad.

A la Dirección Nacional del Notariado le corresponde el control administrativo del notariado en el territorio de la República de Guatemala y en el extranjero.

Artículo 105. Funciones.

La Dirección tendrá a su cargo:

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

105.1. Los registros de notarios, testamentos y donaciones por causa de muerte, voluntades anticipadas, poderes, procesos y asuntos de jurisdicción voluntaria en sede notarial y cualesquiera otros que establezca la ley.

105.2. Los archivos de protocolos y documentos notariales.

105.3. La supervisión administrativa de la función notarial.

Artículo 106. Estructura.

La Dirección Nacional del Notariado estará integrada así:

106.1. Consejo Notarial.

106.2. Director.

106.3. Subdirectores.

106.4. Secretario general

106.5. Delegados regionales o departamentales.

106.6. Personal necesario para el desarrollo de sus funciones.

El Reglamento normará lo relativo a las unidades administrativas de la Dirección y sus funciones.

Artículo 107. Integración del Consejo.

El Consejo Notarial se integra con tres miembros, en la forma siguiente:

107.1. Dos representantes nombrados por la Corte Suprema de Justicia. Uno deberá ser magistrado de la misma, quien lo presidirá. El otro se escogerá entre profesionales de reconocida honorabilidad, que hayan ejercido el notariado por más de quince años.

107.2. Un notario designado por la Junta Directiva del Colegio Profesional, quien deberá reunir las mismas calidades que el notario designado por la Corte.

Los miembros del Consejo serán juramentados por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia; desempeñarán sus cargos durante un período de cinco años contados a partir de la toma de posesión.

La Corte Suprema de Justicia determinará la forma de remuneración de los miembros del Consejo que no sean funcionarios públicos.

El Director podrá participar en las sesiones del Consejo, con voz, pero sin voto.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Artículo 108. Atribuciones del Consejo.

Son atribuciones del Consejo las siguientes:

- 108.1. Aprobar el anteproyecto del presupuesto anual de la Dirección.
- 108.2. Aprobar el informe anual de gestión de la Dirección.
- 108.3. Conocer y resolver los recursos interpuestos contra las resoluciones de la Dirección.
- 108.4. Participar, con el Director, en la elaboración de los proyectos de reglamentos y disposiciones que faciliten el cumplimiento o desarrollo de las funciones de la Dirección. Dichos reglamentos, sin embargo, sólo podrán ser aprobados por la Corte Suprema de Justicia.
- 108.5. Proponer a la Corte, para su aprobación, las tarifas por los servicios administrativos que preste la Dirección.

Artículo 109. Quórum y resoluciones.

El Consejo Notarial será convocado por su presidente cada vez que éste lo considere necesario, o cuando se lo solicite otro de los miembros; en todo caso, se reunirá por lo menos cada dos meses. El Consejo sesionará, válidamente, con la asistencia de dos de sus integrantes; sus resoluciones serán aprobadas por mayoría de votos y en caso de empate el presidente tendrá voto decisorio.

Artículo 110. Director.

El Director es la autoridad administrativa superior de la Dirección. Reunirá las mismas calidades de los magistrados de la Corte de Apelaciones y las específicas siguientes: haber ejercido el notariado por un mínimo de diez años; estar solvente en el cumplimiento de sus obligaciones notariales; no estar sujeto a proceso ni haber sido condenado por los delitos a que se refiere el inciso 9.3 del Artículo 9 de la presente ley; y no haber sido sancionado por el órgano competente del Colegio Profesional.

Artículo 111. Atribuciones del Director.

El Director tendrá las atribuciones siguientes:

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

- 111.1. Planificar, dirigir, supervisar, coordinar y controlar el funcionamiento de la Dirección.
- 111.2. Conocer de las infracciones cometidas por los notarios en el ejercicio de sus funciones; imponer las sanciones administrativas que establece esta ley y llevar registro de las mismas, así como denunciar, en su caso, ante el órgano correspondiente, a los notarios infractores.
- 111.3. Proponer a la Corte Suprema de Justicia a las personas que puedan ser nombradas para desempeñar los cargos de Subdirector y Secretario General y los otros de la Dirección.
- 111.4. Organizar la sesión solemne de juramentación e investidura de fe pública a los notarios, sesión que se efectuará en la Corte Suprema de Justicia.
- 111.5. Llevar los registros y archivos notariales.
- 111.6. Proponer a la Corte Suprema de Justicia las disposiciones necesarias para la debida observancia de la presente ley, de su reglamento y demás normas aplicables.
- 111.7. Comunicar a los notarios las disposiciones que dicte la Corte Suprema de Justicia relacionadas con el notariado.
- 111.8. Dictar, conforme a las leyes y reglamentos, las resoluciones que estime procedentes en los asuntos de su competencia.
- 111.9. Resolver las consultas o dudas planteadas por el Colegio Profesional, las asociaciones gremiales especializadas o los notarios, sobre la aplicación de la presente ley, su reglamento y disposiciones complementarias.
- 111.10. Exigir la entrega de protocolos, documentos notariales, papel de protocolo y sello profesional, en los casos que establece la ley.
- 111.11. Guardar y conservar los protocolos y demás documentos notariales, los cuales no podrán ser extraídos aun con orden de autoridad judicial. Si las autoridades tuvieran que practicar alguna diligencia, la efectuarán en la sede de la Dirección.
- 111.12. Extender, a los interesados, testimonios y copias de los documentos que obran en el archivo, observando, en su caso, lo dispuesto en el Artículo 87.
- 111.13. Asentar la razón de cierre, elaborar el índice, dar los avisos, colocar las cubiertas de testamentos y donaciones por causa de muerte, así como encuadernar los protocolos y cumplir

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

- cualquier otra obligación formal que el notario autorizante hubiere omitido.
- 111.14. Verificar que los notarios cumplan las obligaciones y deberes que imponen la ley, reglamentos y demás disposiciones pertinentes.
 - 111.15. Tramitar y resolver las solicitudes de reposición o rectificación de protocolo, de conformidad con lo dispuesto en esta ley.
 - 111.16. Dar aviso en los registros de identificación personal de la inscripción de los notarios, para que se consigne esta calidad en los documentos respectivos.
 - 111.17. Razonar el documento de identidad del notario, haciendo constar la inscripción de éste en la Dirección.
 - 111.18. Establecer el régimen de inspecciones y revisiones.
 - 111.19. Cualesquiera otras atribuciones establecidas en la ley, reglamentos y demás disposiciones en materia notarial.

Artículo 112. Subdirectores.

Los subdirectores deberán auxiliar a la Dirección, mediante el cumplimiento de las atribuciones que ésta les asigne. Los subdirectores deberán reunir las mismas calidades que el Director. El Subdirector que designe el Consejo sustituirá al Director en caso de ausencia temporal de éste.

Artículo 113. Secretaría General.

A la Secretaría General le corresponde:

- 113.1. La dirección inmediata del personal.
- 113.2. El despacho de la correspondencia.
- 113.3. La elaboración del anteproyecto del presupuesto de la Dirección y proponerlo al Consejo Notarial.
- 113.4. Levantar las actas y refrendarlas.
- 113.5. Autorizar las resoluciones del Consejo Notarial y de la Dirección.
- 113.6. Las otras atribuciones que le asigne la ley, el Reglamento, el Consejo Notarial y la Dirección.

Artículo 114. Delegaciones.

La Dirección podrá establecer delegaciones regionales o departamentales para el cumplimiento de sus funciones. Los delegados,

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

que serán nombrados por la Corte Suprema de Justicia, deberán haber ejercido el notariado por lo menos durante cinco años y llenar las otras calidades exigidas para el cargo de Director.

Artículo 115. Presupuesto.

El presupuesto de la Dirección incluirá los fondos que la Corte Suprema de Justicia asigne anualmente en el presupuesto del Organismo Judicial y los ingresos que por cualquier concepto perciba la propia Dirección; estos últimos tendrán el carácter de fondos privativos, destinados específicamente al funcionamiento de la Dirección.

La Corte Suprema de Justicia aprobará y publicará en el diario oficial el arancel de los servicios que preste la Dirección.

CAPÍTULO II INSPECCIÓN DE PROTOCOLOS

Artículo 116. Inspección.

La Dirección Nacional del Notariado tendrá a su cargo la inspección de protocolos. Las inspecciones se practicarán cuando la Dirección lo considere conveniente y serán generales o especiales, según se refieran a la totalidad del protocolo o a uno o varios documentos. La inspección especial también podrá tener lugar por denuncia escrita presentada por persona que justifique su interés en la solicitud.

En las inspecciones que se realicen en la sede notarial se verificará si existen condiciones idóneas que aseguren la adecuada conservación del protocolo. En todas las inspecciones se establecerá si el notario ha cumplido con los requisitos y formalidades que manda la ley para la función notarial.

En las inspecciones especiales se constatarán los hechos motivo de la denuncia y de los que tengan relación con la misma, a juicio del inspector. Si se establece cualquier circunstancia o hecho que amerite ser corregido o investigado, el inspector lo reportará a la Dirección.



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Artículo 117. Inspectores

Las inspecciones serán efectuadas por el Director, los delegados de la Dirección o por los notarios nombrados por la Corte Suprema de Justicia. La diligencia deberá realizarse en la sede notarial, a menos que la Dirección disponga que sea en otro lugar.

Artículo 118. Resolución

La Dirección o sus delegados dictarán resolución en la que se ordene la inspección, indicando su naturaleza y objeto, el nombre y apellidos del notario cuyo protocolo será examinado, y su número de registro; el nombre y apellidos del inspector; y el lugar, día y hora para la práctica de la inspección.

En la resolución se apercibirá al notario que en caso de resistencia o falta de colaboración se pedirá el secuestro del protocolo con auxilio de la fuerza pública, ante el juez del ramo penal competente de la respectiva sede notarial, el que deberá ordenarlo de inmediato, sin formar artículo.

Al notario se le notificará por escrito por lo menos diez días hábiles antes del día señalado para la diligencia, entregándole copia de la resolución y, en su caso, de la denuncia presentada en su contra. La notificación podrá hacerse personalmente, por medio de notario o por correo certificado con aviso de recepción.

El notario que, por su incumplimiento o negativa, diere lugar a que se decrete el secuestro del protocolo, incurrirá en responsabilidad penal por los delitos de desobediencia, y de supresión, ocultación o destrucción de documentos.

Artículo 119. Colaboración.

El notario tendrá la obligación de estar presente en la diligencia y prestar su colaboración. En caso de impedimento designará por escrito a una persona que lo represente en la inspección.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Artículo 120. Diligencia.

El inspector requerirá la exhibición del protocolo y de la documentación que considere necesaria para cumplir su cometido. Hará constar en el acta el resultado de la inspección y en caso de haber establecido la existencia de omisiones o irregularidades subsanables le fijará un plazo no mayor de veinte días hábiles para subsanarlas, sin perjuicio de las sanciones en que hubiere incurrido.

El notario o la persona con quien se realice la diligencia podrá hacer las observaciones que estime pertinentes, de las que se dejará constancia. La negativa a firmar el acta no afectará la validez de la diligencia. Una copia del acta será entregada al notario o a quien lo represente.

Artículo 121. Resolución.

La Dirección o sus delegados, con base en los antecedentes dictarán resolución en la que podrá acordar:

121. 1. Archivar el expediente, si el notario ha cumplido con las obligaciones que le corresponden.
- 121.2. Iniciar procedimiento administrativo sancionador, si se tratare de omisiones o irregularidades no subsanables o de cualesquiera otras que ameriten sanción conforme a la presente ley.
- 121.3. Si se tratare de infracciones que den lugar a suspensión definitiva, deberá trasladar el expediente a la Corte Suprema de Justicia.
- 121.4. Dictar cualquier otra resolución que considere adecuada para preservar el protocolo o asegurar los derechos de los interesados, teniendo en cuenta lo consignado en el acta de inspección y lo regulado por la presente ley y las demás leyes aplicables a la función notarial.

La resolución se notificará al notario, y si fuere el caso, al denunciante o demás personas con interés. Dicha resolución no prejuzga sobre la validez de los documentos notariales. Contra lo resuelto cabrá recurso de revocatoria que resolverá el Consejo Notarial.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos y no afectará la efectividad de las medidas preventivas que se hubiesen decretado o que sea necesario solicitar y obtener.

Artículo 122. Inspección de protocolos que se encuentren en el extranjero.

Las inspecciones de los protocolos de los notarios que ejerzan permanentemente en el extranjero se practicarán en la sede de la Dirección, que a esos efectos requerirá la remisión del protocolo por los medios y dentro del plazo que señale en la respectiva resolución. Si el notario no cumple con el requerimiento, se iniciará en su contra el correspondiente proceso sancionador y se resolverá que no podrá vendérsele papel de protocolo hasta que solvante su obligación.

Artículo 123. Reconocimientos y peritajes.

Los reconocimientos y peritajes sobre el protocolo ordenados por juez o autoridad competente, se practicarán en la sede notarial o en el lugar que indiquen esos funcionarios, y del modo que determine la respectiva resolución.

TÍTULO IX FUNCIÓN SOCIAL DEL NOTARIO

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 124. Función social del notario.

El notario, en virtud de la potestad de dar fe de la que ha sido investido, deberá colaborar cuando las autoridades requieran sus servicios para atender asuntos de interés social.

Las autoridades, en especial las encargadas de asuntos de vivienda popular o agrarios, enviarán el requerimiento al Colegio Profesional, indicando la naturaleza de los servicios requeridos y el número de notarios que considera necesarios para el pronto cumplimiento de dichos servicios. El Colegio, por sorteo, en estricto orden y equidad, designará a los notarios que deban prestar sus servicios a la autoridad requirente; no

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

obstante, cualquier notario podrá agregarse a la lista de los designados, si así lo solicita éste en forma voluntaria.

Si algún notario designado fuere excusa basada en impedimento legal o por razón de fuerza mayor, lo hará saber al Colegio para que éste seleccione a otro profesional.

Artículo 125. Casos especiales.

Cuando el Estado, sus entidades descentralizadas, dependencias u oficinas, deban comparecer a otorgar un instrumento público, deberán solicitar la selección de un notario al Colegio Profesional, para que éste indique quién será el notario autorizante, de conformidad con lo señalado en el artículo anterior.

A los abogados y notarios que laboren para el Estado, para las dependencias u oficinas de éste, o bien para las entidades descentralizadas o autónomas y para las Municipalidades, se aplican las restricciones señaladas en el Artículo 14 de esta ley.

Artículo 126. Mediación notarial.

Como parte de su función social, los notarios que reúnan los requisitos y cumplan las formalidades que establezca la Unidad de Resolución Alternativa de Conflictos del Organismo Judicial, en el Reglamento de Mediación Notarial que apruebe la Corte Suprema de Justicia, podrán intervenir como mediadores en cualquier clase de asuntos en los que las partes tengan libre disposición de sus derechos y no requieran autorización judicial para hacerlo.

Para habilitar la actuación de los notarios como mediadores, bastará la notificación de su nombramiento, sin que sea necesario discernirles el cargo. Los notarios podrán excusarse de actuar como mediadores, por las mismas causales que la ley prevé en el caso de los jueces.

Artículo 127. Nombramiento.

Las partes podrán proponer al notario mediador. Si no hicieren ninguna propuesta, el juez que conoce del asunto hará el nombramiento del notario que escoja de la lista que en el mes de enero de cada año,

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

deberá remitir la Unidad de Resolución Alternativa de Conflictos del Organismo Judicial a todos los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia del país.

Artículo 128. Características.

Los notarios que intervengan como mediadores actuarán con toda diligencia, responsabilidad, celeridad, objetividad y confidencialidad, y estarán facultados para proponer las soluciones o fórmulas de avenencia que consideren pertinentes para poner fin, de manera parcial o total, a las pretensiones de las partes, a las que podrá reunir en sesiones conjuntas o separadas. Previa acreditación de su calidad de mediador, podrá consultar, sin ninguna restricción, el respectivo expediente judicial o cualquier otro que tuviese relación con el caso, pudiendo obtener, sin citación de las partes, fotocopias simples o certificadas de dichos expedientes.

Artículo. 129. Plazo.

La mediación deberá concluir en un plazo no mayor de treinta días hábiles, computado desde la fecha en que se notifique a las partes y al notario la resolución que apruebe, a solicitud de ambas partes, la mediación notarial. El plazo podrá prorrogarse por otros treinta días, por una sola vez, a petición formulada por las partes ante el juez o ante el notario. En este último supuesto, el notario dará inmediato aviso escrito al órgano jurisdiccional que conoce del asunto. La mediación puede solicitarse cuantas veces así lo dispongan las partes y en cualquier estado del proceso, pero ello sólo podrá hacerse antes de que se dicte sentencia de segunda instancia. Concluido el plazo de la mediación, el notario dará aviso al juez del resultado de su gestión.

Artículo 130. Suspensión.

Durante la mediación notarial quedará en suspenso el trámite del proceso, y el juez sólo podrá conocer de aquellos asuntos que considere impostergables, urgentes o necesarios, circunstancias estas que deberá justificar en la respectiva resolución; también podrá conocer de aquellos otros asuntos que le autoriza la ley, no obstante estar suspendida su jurisdicción en virtud de apelación.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Artículo 131. Formalidades.

Las actuaciones del notario mediador se harán constar en actas notariales. Sin embargo, el acuerdo a que llegaren las partes se podrá formalizar en documento privado, con firmas legalizadas notarialmente, a menos que, por disposición de la ley, por petición de ambas partes o porque el notario lo considera necesario, se deba formalizar en escritura pública.

Artículo 132. Fuerza ejecutiva.

Además de la eficacia probatoria inherente a los documentos notariales, conforme a lo dispuesto en el Artículo 18 de esta ley, los documentos en los que se haga constar el acuerdo de la mediación notarial producirán los efectos propios de la transacción y de los títulos ejecutivos, siempre que en este último caso aquellos documentos reúnan los requisitos que exige la ley.

Artículo 133. Archivo.

Concluida la mediación, el notario extenderá a las partes, previo pago de sus honorarios y de los gastos en que se haya incurrido, testimonio o copia simple legalizada, según lo requieran los interesados, de la escritura respectiva, o bien sendas fotocopias legalizadas del documento privado, cuyo original archivará como comprobante de protocolo.

Asimismo, el notario hará del conocimiento de la Unidad de Resolución Alternativa de Conflictos del Organismo Judicial y del juez de los autos, el acuerdo suscrito por las partes, remitiéndoles copia legalizada.

TÍTULO X JURISDICCIÓN VOLUNTARIA EN SEDE NOTARIAL

CAPÍTULO I PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES GENERALES



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Artículo 134. Sede notarial.

El notario podrá conocer, sustanciar y resolver los siguientes asuntos jurídicos, siempre que no exista o surja conflicto u oposición de intereses:

- 134.1. Ausencia.
- 134.2. Disposición y gravamen de bienes de menores, incapaces y ausentes.
- 134.3. Divorcio y separación por mutuo consentimiento.
- 134.4. Reconocimiento de preñez o de parto.
- 134.5. Cambio de nombre.
- 134.6. Identificación de tercero.
- 134.7. Asiento extemporáneo y rectificación de partidas del Registro Civil.
- 134.8. Determinación de edad.
- 134.9. Adopción.
- 134.10. Unión de hecho.
- 134.11. Procesos sucesorios.
- 134.12. Constitución de patrimonio familiar.
- 134.13. Subastas.
- 134.14. Titulación supletoria.
- 134.15. Rectificación de área de bienes inmuebles.

El notario también podrá tramitar y resolver otros asuntos que permitan las leyes. En todos los casos, el notario deberá velar por el estricto cumplimiento de los requisitos sustantivos y de procedimiento que esta ley o normas específicas establezcan.

Únicamente cuando la ley lo disponga, la resolución final, debidamente fundamentada, será dictada por juez competente. Igualmente, el notario podrá acudir al juez en los casos específicos en que se requiera intervención judicial, por circunstancias especiales, según esta ley. El juez competente será el de la sede notarial.

En todo lo que no se halle previsto en esta materia, se aplicarán supletoriamente las disposiciones pertinentes del Código Procesal Civil y Mercantil,

Artículo 135. Consentimiento unánime.



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Para tramitar los asuntos anteriores se requiere el consentimiento unánime de todos los interesados. Si alguno de éstos se opusiere en cualquier momento de la tramitación, el notario se abstendrá de seguir conociendo y remitirá lo actuado al juez competente, sin perjuicio de su derecho a obtener el pago de los gastos y honorarios que se hubieren pactado o los que disponga el arancel.

Artículo 136. Actuaciones y resoluciones.

Todas las actuaciones se harán constar en acta notarial, excepto las resoluciones que serán de redacción discrecional. En cualquier caso, se deberán consignar los nombres, apellidos y el número de registro del notario, dirección de la sede notarial de éste, así como el lugar y fecha de la disposición que se dicte y la firma y sello del notario.

Los avisos o publicaciones deberán contener, en lo pertinente, la información antes indicada. Las resoluciones se notificarán a todos los interesados a quienes se entregará copia; además, el notario deberá dejar constancia de la notificación en el expediente, por medio del respectivo asiento.

Las actuaciones se redactarán en original y duplicado, los que serán firmados por los que hayan intervenido en la diligencia. Los duplicados quedarán en poder del notario, quien los conservará por lo menos durante el año que siga a la fecha de finalización del asunto. El duplicado servirá para la reposición total o parcial del expediente.

Artículo 137. Colaboración de las autoridades.

El notario, por medio de oficio, podrá requerir de las autoridades los datos e informes indispensables para la tramitación de los expedientes; cuando no le fueren proporcionados después de haberlos requerido tres veces, podrá acudir al juez competente de Primera Instancia del Ramo Civil o de Familia, para que apremie al requerido.

Artículo 138. Audiencia a la Procuraduría General de la Nación.

Cuando la ley así lo disponga, será obligatoria la audiencia a la Procuraduría General de la Nación antes de dictar la resolución final, so



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

pena de nulidad de lo actuado. La Procuraduría deberá evacuar la audiencia en el término de cinco días.

El notario también podrá recabar la opinión de la Procuraduría en casos de duda o cuando lo estime necesario.

Si la opinión de la Procuraduría fuere adversa, o el notario no estuviere de acuerdo con ésta, previa notificación a los interesados deberá enviar el expediente al juez competente para su resolución.

Si la Procuraduría requiere el cumplimiento previo de requisitos específicos y no se objetare esa opinión, el notario procederá a satisfacerlos y conferirá nueva audiencia a dicha institución.

Artículo 139. Opción al trámite.

Los interesados tienen opción de acogerse al trámite notarial o al judicial, según lo estimen conveniente. En cualquier momento, la tramitación notarial puede convertirse en judicial o viceversa.

Para la recepción de los medios de prueba, deben observarse los requisitos que preceptúa la ley.

Artículo 140. Sustitución de notario.

En cualquier etapa del trámite, con el consentimiento de todos los interesados, podrá cambiarse el notario. El reemplazado, en el plazo de los tres días posteriores al de la fecha en que se le notificó su sustitución, deberá hacer entrega del expediente al notario reemplazante. Igual obligación tendrá el notario que tenga impedimento absoluto o temporal para continuar ejerciendo su profesión.

En caso de desacuerdo, o si el notario o los otros obligados se resisten sin causa justificada a entregar el expediente, o si el notario hubiere fallecido, se procederá conforme a lo dispuesto en el Artículo 44.

Artículo 141. Medidas de orden judicial.

Cuando se requieran medidas que sólo pueden cumplirse mediante orden judicial, como la entrega de fondos, la colocación de sellos, la

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

entrega de informes bancarios o de otras instituciones financieras, la apertura de locales, la entrega de bienes en poder de terceros, la apertura de cajas de seguridad, o cualesquiera otras medidas que el notario estime pertinentes o que no puedan ejecutarse sin la necesaria coercibilidad, el notario se dirigirá al juez de Primera Instancia del Ramo Civil de su domicilio, mediante oficio, solicitándole el cumplimiento de tales medidas. El juez podrá, antes de ordenarlas, disponer que se lleve a su vista el expediente extrajudicial, el que será devuelto al notario cuando se cumpliera la medida que se hubiere requerido.

Artículo 142. Inscripción en los registros.

Para la inscripción de cualquier resolución notarial en los registros públicos, será suficiente la certificación notarial de la misma, extendida por cualquiera de los procedimientos de reproducción permitidos por el Artículo 84 de esta ley. La certificación se expedirá en duplicado, incluyendo, cuando proceda, la opinión de la Procuraduría General de la Nación o la resolución judicial a que se refiere el Artículo 138 de esta ley.

En los casos en los que el asunto concluya con el otorgamiento de escritura pública, el título inscribible será el testimonio de esta última, al que deberá agregarse fotocopia legalizada de la opinión de la Procuraduría o de la correspondiente resolución judicial. En las particiones de herencias o división de bienes, el testimonio podrá circunscribirse a la reproducción de las partes conducentes del expediente.

Artículo 143. Remisión a la Dirección Nacional del Notariado.

Concluido el trámite del expediente, el notario deberá enviar el original a la Dirección Nacional del Notariado, dentro de los veinticinco días hábiles siguientes.

En el caso de procesos sucesorios el plazo empezará a contarse a partir de la fecha en que quede firme la respectiva liquidación fiscal.

Artículo 144. Registro.

Se crea el Registro de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria en Sede Notarial, a cargo de la Dirección y con la finalidad primordial de garantizar el registro, consulta y conservación de los respectivos expedientes. Para el



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

efecto, el notario deberá comunicar a la Dirección el inicio de cualquiera de dichos expedientes, dentro de los quince días siguientes a la fecha de la resolución que se dicte respecto a la primera solicitud, debiendo adjuntar copia auténtica del acta y la resolución iniciales.

Artículo 145. Honorarios y gastos.

En todos los casos en los que el notario deje de conocer y deba entregar el expediente, tendrá derecho a que, previamente, se le paguen los gastos y honorarios pactados o los que disponga el arancel, o bien que se le garantice el pago por dichos conceptos, en proporción al trabajo realizado.

CAPÍTULO II AUSENCIA

Artículo 146. Solicitud.

La solicitud para que se declare la ausencia de una persona debe ser presentada por quien tenga interés en ello.

El notario, con notificación a la Procuraduría General de la Nación, recibirá información que acredite lo siguiente:

- 146.1. El hecho de la ausencia;
- 146.2. La circunstancia de que el ausente no tiene parientes o mandatario con facultades suficientes, ni tutor en caso de que el ausente sea menor o incapacitado.
- 146.3. El tiempo de la ausencia.

Con la solicitud deberán acompañarse los documentos que permitan probar los extremos indicados en este artículo.

Artículo 147. Publicaciones.

El notario dispondrá la publicación de la solicitud en el diario oficial y en otro de reconocida circulación, en tres ocasiones distintas durante el término de treinta días, con intervalos no menores de siete días, incluyendo en el edicto la indicación del asunto para el que ha sido pedida la declaración de ausencia, la citación del presunto ausente, la convocatoria a los parientes o personas que se consideren con derecho a



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

representar a éste, la dirección de la oficina notarial, y además la fecha, firma, sello y número de registro del notario.

Artículo 148. Remisión del expediente.

Después de transcurrido el tiempo de las publicaciones o si se hubiere manifestado oposición por algún interesado, el notario remitirá el expediente al juez competente del último domicilio del presunto ausente, para los efectos del nombramiento del defensor judicial y para que se continúe la tramitación, de conformidad con lo establecido en las leyes sustantivas y procesales que regulen la ausencia.

El notario procederá en igual forma, si considerare necesaria la intervención judicial para que se dicte alguna medida cautelar urgente.

Artículo 149. Inventario.

El notario, bajo su responsabilidad y asociado de un experto valuador autorizado por el Ministerio de Finanzas Públicas, levantará inventario de los bienes del presunto ausente, y el juez, al tener conocimiento de dicho inventario, resolverá lo relacionado con el depósito y administración de los bienes.

CAPÍTULO III DISPOSICIÓN Y GRAVAMEN DE BIENES DE MENORES, INCAPACES Y AUSENTES.

Artículo 150. Sollicitud.

En la solicitud para disponer o gravar bienes de menores, incapaces o ausentes, se deberá cumplir con las normas sustantivas y procesales que regulan la materia.

Artículo 151. Pruebas.

El notario, con citación de la Procuraduría General de la Nación y notificación al tutor, protutor, guardador o representante del menor, en cada caso, mandará recabar la prueba propuesta y practicará, de oficio, cuantas diligencias considere necesarias o convenientes con el fin



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

de establecer que hay necesidad urgente y manifiesta utilidad del acto que se pretende realizar en favor del representado.

Si fuere necesaria la tasación de bienes, será practicada por valuator autorizado por el Ministerio de Finanzas Públicas.

Artículo 152. Declaratoria de utilidad y necesidad.

Recibida la prueba, el notario dará intervención de la Procuraduría y enviará el expediente para que ésta emita opinión. Si en esta opinión no se expresare objeción alguna, el notario dictará resolución, bajo su más estricta responsabilidad y la de todos aquellos que hubieren intervenido en las diligencias. En la resolución se declarará, primero, si existen la utilidad y la necesidad, y autorizará en su caso la disposición o gravamen de los bienes, fijando las bases de la operación; y segundo la determinación de los pasajes conducentes del expediente que deban incluirse en la escritura.

Tratándose de venta de bienes, el notario podrá disponer que ésta se haga en subasta, fijando los términos de la misma.

En otros casos en los que se necesite la autorización judicial, se observarán las prescripciones de este capítulo, en lo que fueren aplicables.

CAPÍTULO IV DIVORCIO Y SEPARACIÓN POR MUTUO CONSENTIMIENTO

Artículo 153. Solitud.

El divorcio o la separación por mutuo consentimiento podrán pedirse ante un notario que tenga oficina en el domicilio de los cónyuges, en forma personal y simultánea por éstos, o bien por medio de apoderados facultados expresamente para ello.

Artículo 154. Conciliación.

Suscrita el acta inicial, el notario convocará a una audiencia específica para proponer a los cónyuges fórmulas de avenimiento o conciliación.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Entre el acta del requerimiento inicial y la audiencia conciliatoria deberán mediar no menos de quince días.

Artículo 155. Convenio.

El notario, según lo acordado por las partes, elaborará el convenio de bases del divorcio o de la separación, en el que constarán, según el caso, los puntos siguientes:

- 155.1. A quién se confiarán los hijos menores o incapaces habidos en el matrimonio, así como el régimen de relaciones familiares a que éstos quedarán sujetos.
- 155.2. El cónyuge por cuya cuenta deberán ser alimentados y educados los hijos, y las circunstancias en las que esta obligación corresponderá a ambos cónyuges, así como la proporción en que contribuirá cada uno de éstos.
- 155.3. La pensión que deberá pagar el marido a la mujer, si ésta no tiene rentas propias que basten para cubrir sus necesidades.
- 155.4. La garantía que se prestará para cumplir las obligaciones que por el convenio contraigan los cónyuges.

El convenio no perjudicará a los hijos, quienes, a pesar de las estipulaciones, conservarán íntegros sus derechos a ser alimentados y educados, de acuerdo con lo que establece la ley.

Cuando existan intereses de menores o incapaces, el convenio deberá ser homologado por el juzgado de familia competente, el que velará porque los derechos de los menores o incapaces no sean vulnerados y calificará la garantía prestada, en su caso.

Artículo 156. Formalización de garantías.

Suscrito o aprobado judicialmente el convenio, el notario formalizará, en escritura pública, las garantías que se presenten para el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el convenio.



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Artículo 157. Sentencia.

Cumplidos los requisitos a los que se refieren los artículos anteriores e inscritas las garantías correspondientes, el notario enviará el expediente a un juez competente para que dicte sentencia.

Artículo 158. Reconciliación.

En cualquier estado del trámite de separación o de divorcio y antes que sea dictada la sentencia de separación, los cónyuges podrán reconciliarse. La reconciliación podrá hacerse constar en acta notarial o en escritura pública, y en uno u otro caso el notario las incorporará al expediente.

CAPÍTULO V RECONOCIMIENTO DE PREÑEZ O DE PARTO

Artículo 159. Solicitudo.

La mujer puede solicitar ante notario, el reconocimiento de su preñez o de parto en los casos de ausencia, separación o muerte de su marido. Igual derecho tienen los herederos instituidos o legales del marido, en caso de que éste hubiere fallecido.

Con la solicitud deberán presentarse documentos fehacientes que acrediten la ausencia, separación o muerte del marido, y se pedirá que se nombren dos facultativos para que hagan el reconocimiento.

Artículo 160. Medidas de oficio.

El notario está facultado para tomar de oficio o a instancia de quien tuviere interés, todas las medidas que estime necesarias para reconocer la preñez o para comprobar la efectividad del parto en el tiempo legal.

Al ocurrir el parto, los facultativos nombrados inmediatamente darán aviso escrito al notario, expresando el día, lugar y hora del alumbramiento, las personas que asistieron, las demás circunstancias especiales respecto del nacido y el tiempo que éste vivió, en caso de haber muerto.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Artículo 161. Declaración notarial.

Con apoyo en las constancias documentales a que se refiere el artículo anterior, y en cualquier otro medio de prueba que se haya incorporado al expediente, por requerimiento del notario o a instancia de parte interesada, el notario declarará el hecho del nacimiento y establecerá la filiación

Artículo 162. Oposición.

Si se hubiere manifestado oposición por cualquier persona con interés, el notario remitirá el expediente a un juez competente del domicilio de la interesada, para que resuelva lo pertinente.

CAPÍTULO VI CAMBIO DE NOMBRE

Artículo 163. Solicitud y trámite.

La persona que por cualquier motivo desee cambiar su nombre, de acuerdo con lo establecido en el Código Civil, lo puede solicitar ante notario, expresando los motivos que tuviere para hacerlo y el nombre completo que quisiera adoptar.

El notario recibirá la información que ofrezca el solicitante y dispondrá que se publique el aviso de la solicitud en el diario oficial y en otro de reconocida circulación, lo que se hará tres veces en el término de treinta días, con intervalos de ocho días por lo menos. El aviso expresará el nombre completo del peticionario, el nombre que desee adoptar y la advertencia de que puede formalizarse oposición por quien se considerare perjudicado por el cambio de nombre, efecto este para el cual se indicará la dirección de la oficina notarial.

Artículo 164. Resolución.

Recibida la información y transcurridos diez días a partir de la última publicación sin que hubiere oposición, el notario hará constar el cambio de nombre y dispondrá que ello se comunique al Registro Civil, para que se haga la anotación correspondiente.



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Artículo 165. Oposición.

Si se hubiere presentado oposición al cambio de nombre solicitado, el notario remitirá el expediente a un juez competente del domicilio del interesado.

CAPÍTULO VII IDENTIFICACIÓN DE TERCERO

Artículo 166. Identificación de tercero.

Cuando la identificación se refiera a un se mandará que la solicitud se publique una sola vez en el diario oficial y en otro de reconocida circulación, en edicto en el que consten los nombres completos de la persona cuya identificación se pide, los nombres y apellidos que hubiera usado constante y públicamente y los que aparezcan en su partida de nacimiento; asimismo, se fijará el plazo de diez días, a partir de la publicación, para presentar oposiciones, lo cual deberá hacerse en la dirección de la oficina notarial. El solicitante aportará la documentación que tuviere y propondrá la información de testigos; éstos podrán ser parientes de la persona cuya identificación se solicita.

Artículo 167. Acta de notoriedad.

Pasado el plazo de la oposición a que se refiere el artículo anterior, sin que ésta se haya hecho valer, se podrá hacer constar la notoriedad de la identificación en acta en la que se consignará lo siguiente:

- 167.1. Requerimiento de la persona interesada, quien comprobará la calidad con que actúa.
- 167.2. Declaración jurada del interesado acerca de los extremos de su solicitud.
- 167.3. Declaración de dos testigos, cuando menos.
- 167.4. Relación de los documentos que se han tenido a la vista.
- 167.5. Declaratoria de la notoriedad de la identificación, justificada suficientemente a juicio del notario.



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAPÍTULO VIII ASIENTO EXTEMPORÁNEO Y RECTIFICACIÓN DE PARTIDAS DEL REGISTRO CIVIL

Artículo 168. Solicitud.

En caso de haberse omitido una partida o circunstancia esencial en los Registros Civiles, el interesado podrá recurrir a un notario, quien, basado en las pruebas que se le presenten, en las que de oficio recabare, y previa audiencia a la Procuraduría General de la Nación, resolverá que se repare la omisión o se haga la rectificación correspondiente. Si hubiere alguna sanción que aplicar, ésta será determinada por el respectivo Registrador Civil.

Artículo 169. Omisiones y errores en el acta de inscripción.

Cuando en el acta respectiva se hubiere incurrido en omisión o error que afecte el fondo del acto inscrito, el interesado podrá ocurrir ante notario para que, después de conceder audiencia al Registrador Civil que corresponda y a la Procuraduría General de la Nación, resuelva sobre la procedencia de la rectificación y anotación en la inscripción original.

CAPÍTULO IX DETERMINACIÓN DE EDAD

Artículo 170. Determinación de edad.

Si en un acto o diligencia que no sea de carácter procesal penal no fuere posible fijar la fecha del nacimiento de una persona, se podrá acudir ante notario, y éste consignará la edad que fije un facultativo competente de acuerdo con el desarrollo y aspecto físico de la persona.

CAPÍTULO X ADOPCIÓN

Artículo. 171. Formalización.

La adopción regulada por el Código Civil puede ser formalizada ante notario, sin que se requiera aprobación judicial.



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

La colocación del menor en adopción no debe dar lugar a beneficios financieros indebidos para quienes participan en ella.

Artículo 172. Solicitud.

La solicitud de la persona que desee adoptar a otra, puede hacerse ante notario, presentando la certificación de la partida de nacimiento correspondiente y proponiendo el testimonio de dos personas honorables, y el informe de una trabajadora social, a efecto de acreditar las buenas costumbres del adoptante y su posibilidad económica y moral para cumplir las obligaciones que la adopción impone.

Artículo 173. Pruebas complementarias.

Es responsabilidad del notario recabar las pruebas que aseguren que se cuenta con el consentimiento de los padres naturales o biológicos o del representante legal del menor, según el caso. Asimismo debe asegurarse que éstos hayan dado su consentimiento a la adopción con conocimiento de causa, contando con el debido asesoramiento.

Artículo 174. Inventario.

Si el menor tiene bienes, se levantará inventario notarial y se constituirá garantía suficiente por el adoptante a satisfacción del notario.

Artículo 175. Requisitos para el tutor.

Si el solicitante hubiere sido tutor del menor, el notario deberá tener a la vista los documentos en que conste que fueron aprobadas sus cuentas y que los bienes fueron entregados.

Artículo 176. Requisitos para la adopción internacional.

Cuando el menor o el adoptante no tengan la nacionalidad guatemalteca o no residan en Guatemala, la adopción se considerará internacional y deberán observarse además de los requisitos que señalan el Código Civil y esta ley, la Convención Sobre los Derechos del Niño,



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en resolución 44/25 de 20 de noviembre de 1989.

El notario tomará las medidas apropiadas para garantizar que, en el caso de adopción que implique el traslado del menor a otro país, para que haya continuidad en la educación del niño, tomando en cuenta su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico.

Artículo 177. Audiencia.

Llenados los requisitos legales, el notario oirá a la Procuraduría General de la Nación y si esta institución no pusiere objeción, se otorgará la escritura respectiva.

En caso de que la Procuraduría objetara, se remitirá el expediente al tribunal competente para que dicte la resolución que proceda.

Artículo 178. Escritura.

En la escritura de adopción deberá comparecer el adoptante y los padres del menor, o la persona o institución que ejerza la tutela. El notario extenderá el respectivo testimonio para enviarlo a los registros que proceda, a fin de que se hagan las anotaciones relativas a la adopción.

Artículo 179. Audiencia a la Procuraduría General de la Nación.

Llenados los requisitos anteriores, el notario oirá a la Procuraduría General de la Nación y si esta institución no pusiere objeción alguna, se otorgará la escritura respectiva.

En el caso de que la Procuraduría objetara, se remitirá el expediente al tribunal competente para que dicte la resolución procedente.

Artículo 180. Escritura.

En la escritura de adopción deberá comparecer el adoptante y los padres del menor, o la persona o institución que ejerza la tutela. El notario extenderá el respectivo testimonio para enviarlo a los registros que proceda, a fin de que se hagan las anotaciones relativas a la adopción.

CAPÍTULO XI



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

UNIÓN DE HECHO

Artículo 181. Casos.

Los notarios podrán hacer constar la existencia y cesación de la unión de hecho de un hombre y una mujer, siempre que ambos manifiesten, en un mismo acto y bajo juramento, que se encuentran en cualquiera de esas situaciones y que cumplen los requisitos que para dicha institución establece el Código Civil.

La unión o su cesación se asentará en acta notarial o en escritura pública, pero esta última sólo será obligatoria si existen bienes comunes inscribibles en el Registro de la Propiedad, aportados o adquiridos durante la unión.

Artículo 182. Menores de edad.

Si uno de los interesados fuere menor de edad, será necesaria la comparecencia y consentimiento de los padres o del tutor o, en su caso, deberá presentarse la respectiva autorización judicial.

Artículo 183. Prohibición.

Los notarios no podrán intervenir en los casos de uniones de hecho si uno de los interesados hubiere fallecido.

CAPÍTULO XII PROCESOS SUCESORIOS

Artículo 184. Acta inicial.

Pueden promover el proceso sucesorio los que tengan interés en la herencia, tales como el cónyuge supérstite, los herederos, la Procuraduría General de la Nación, los legatarios, los acreedores, el albacea o por otro concepto similar.

El proceso se iniciará con el acta en la que conste el requerimiento de los interesados, quienes, además de justificar su interés, deberán presentar, al mismo tiempo, el certificado de defunción o la certificación de la declaración de muerte presunta del causante, los documentos que acrediten el parentesco si se trata de sucesión intestada o si esos documentos fueren necesarios por razones alimenticias o de otra

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

naturaleza, a juicio del notario; deberá presentarse, asimismo, el testimonio del testamento o de la donación por causa de muerte debidamente inscrito, si los hubiere.

Artículo 185. Primera resolución.

Después de faccionar la primer acta, el notario declarará promovido el proceso sucesorio, ordenará que se de aviso de la radicación a la Dirección Nacional del Notariado, convocará a junta de herederos, citando a quienes tengan interés en la herencia por medio de edictos que mandará se publiquen tres veces en el Diario Oficial; nombrará al experto valuador de los bienes relictos; asentará lo relativo a la administración provisional de la herencia, y dictará las otras medidas previstas en las leyes que regulen la materia y que sean de su competencia.

Artículo 186. Representación de la herencia.

El administrador de la herencia, una vez se le haya discernido el cargo y sin necesidad que se homologue su nombramiento, tendrá la representación legal de la misma, en juicio y fuera de él. Podrá promover demandas que interesen a la mortual o que tengan por objeto hacer efectivos derechos o recobrar bienes que le pertenezcan y contestar aquellas que se entablen en su contra, así como intervenir en cualquier otra diligencia extrajudicial. Sin embargo, el administrador necesitará autorización de todos los presuntos herederos o legatarios para allanarse, contestar en sentido afirmativo las demandas o desistir de los juicios y de las apelaciones.

Artículo 187. Inventario.

El notario faccionará el inventario del patrimonio hereditario, cuidando de especificar detalladamente los bienes, derechos y acciones que constituyen el activo, con su valor actual; y el pasivo, formado por las obligaciones, gastos deducibles y las costas que gravan la herencia. También indicará lo relativo a bienes gananciales y litigiosos.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Adjuntará al expediente el inventario, los documentos que justifiquen el pasivo y los que determinen la calidad de los bienes.

Artículo 188. Junta de herederos.

En la audiencia respectiva, el notario dará lectura al testamento o a la donación por causa de muerte, si los hubiere. Después hará constar la aceptación o repudio de la herencia y si los herederos y legatarios reconocen recíprocamente sus derechos hereditarios. El cónyuge supérstite podrá pedir que se haga constar lo relativo a bienes gananciales.

La forma de administrar la herencia podrá decidirse por mayoría, mientras se hace la partición. Si fuere pertinente, se dejará constancia de los bienes que queden en posesión de cada presunto heredero o legatario.

En tanto no se hubiere elaborado el inventario, la mayoría se computará por votos personales. Después se computará por capitales y, en caso de empate, por personas. Las estirpes tendrán derecho a un solo voto.

La inasistencia justificada de algún heredero o legatario no impedirá la celebración de la junta, pudiendo hacer constar posteriormente ante el notario lo que convenga a su derecho.

Si los herederos y legatarios lo aceptan, podrán asistir en la junta los acreedores.

Artículo 189. Audiencia a la Procuraduría General de la Nación.

Llenados todos los requisitos del caso, el notario entregará el expediente a la Procuraduría General de la Nación, con el objeto de recabar su parecer. La Procuraduría podrá pedir la presentación de los documentos que estime necesarios o la enmienda de los ya acompañados si fueren defectuosos, e impugnar el inventario. Se pronunciará acerca de quiénes son las personas llamadas a heredar al causante y aprobará la calificación de bienes gananciales que contenga el inventario.

Artículo 190. Impugnaciones de la Procuraduría General de la Nación.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Si los interesados compartieran las observaciones formuladas por la Procuraduría General de la Nación y dieran cumplimiento a sus requerimientos, el notario podrá hacer la declaratoria a que se refiere el artículo siguiente.

Si las observaciones no fueren compartidas por los herederos o legatarios, el notario someterá el expediente al juez competente, quien resolverá la cuestión en la forma establecida para los incidentes y, al estar firme la resolución, devolverá las diligencias al notario con certificación de lo que se hubiera resuelto.

Cuando la Procuraduría, tratándose de sucesión testamentaria, objetare determinadas cláusulas del testamento, sin acusar la nulidad de éste, el notario podrá hacer la declaratoria correspondiente; pero quedará obligado a someter el expediente al juez competente, para los efectos de su homologación.

Si se impugnare la validez del testamento o la capacidad para suceder de algún heredero o legatario, la controversia se sustanciará en juicio ordinario y el notario pasará el expediente al juez competente.

Artículo 191. Reconocimiento de herederos y legatarios.

Con vista de lo actuado, de los documentos aportados y del dictamen de la Procuraduría General de la Nación, el notario resolverá en forma razonada reconociendo como herederos legales a quienes corresponda de acuerdo con el Código Civil para la sucesión intestada, sin perjuicio de tercero de igual o mejor derecho; o como herederos y legatarios a los instituidos, en el caso de haber testamento.

Artículo 192. Homologación.

El juez que recibiere las actuaciones, ya sea en virtud de lo dispuesto por el artículo 194, o porque el notario lo estima conveniente, si encontrare que están en forma, procederá a su aprobación sin más trámite, dictando auto en que consigne:

- 192.1. Que está probado el fallecimiento del causante o su muerte presunta.



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

- 192.2. El nombre y dirección del notario ante quien se tramita el proceso sucesorio extrajudicial.
- 192.3. El nombre de los herederos que justificaron su condición de tales.
- 192.4. La declaratoria respecto a las cláusulas que contengan condiciones imposibles de cumplir o disposiciones contrarias a la moral o a la ley; y
- 192.5. La aprobación del inventario, si fuere el caso.

Este auto será apelable. Al quedar firme la decisión judicial, el expediente volverá a poder del notario, con certificación de lo resuelto.

Artículo 193. Liquidación fiscal.

El notario entregará el expediente al Ministerio de Finanzas Públicas para que, sin otro trámite y con base en lo actuado, practique la liquidación de los impuestos respectivos, de acuerdo con la ley.

El expediente será devuelto al notario con certificación de lo resuelto.

Artículo 194. Titulación y registros.

El notario compulsará testimonio o copia simple legalizada de las partes conducentes del proceso a cada uno de los herederos y legatarios, debiendo insertar en todo caso los pasajes que contengan el reconocimiento de herederos y legatarios, la aprobación de las actuaciones en su caso, y fotocopia del recibo de pago del respectivo impuesto. El testimonio se extenderá como de valor indeterminado.

Los testimonios serán presentados a los registros correspondientes; y dentro de los quince días siguientes a la devolución del testimonio registrado, el notario dará aviso a las oficinas que proceda, para los efectos de los traspasos correspondientes.

Artículo 195. Archivo.

Cumplidas las diligencias correspondientes y dentro del plazo establecido en el Artículo 147 de esta ley, el notario remitirá el expediente a la



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Dirección General del Notariado, salvo que los herederos decidieren hacer la partición de los bienes, en cuyo supuesto se esperará hasta que esta operación quede terminada de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo VII, Título II, Libro Cuarto del Código Procesal Civil y Mercantil.

Artículo 196. Simultaneidad de procesos.

Si un proceso sucesorio se promoviere por distintos herederos simultáneamente ante diferentes notarios, no mediando acuerdo de las partes para reducirlo a uno solo, se remitirán todos los procesos a un juez competente del último domicilio del causante, para acumularlos y tramitar un solo proceso judicial.

CAPÍTULO XIII CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO FAMILIAR

Artículo 197. Solicitud.

Salvo lo que permitan leyes especiales para la constitución de un patrimonio familiar, la solicitud se presentará ante un notario, para cuyo efecto se llenarán los requisitos que establezca la ley. Son aplicables las disposiciones del Código Civil, excepto en lo que se refiere a la aprobación.

Artículo 198. Publicidad y oposición.

Si la solicitud se encontrare bien documentada, el notario dispondrá la publicación de un edicto en el que se consignarán el nombre del solicitante, los bienes y el nombre de los beneficiarios del patrimonio familiar. Esta publicación se hará en el diario oficial y en otro de reconocida circulación, por una sola vez.

Si presentare oposición, el notario remitirá el expediente a un juez competente para lo que haya lugar.

Artículo 199. Escrituración.



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Si después de concluido el término de las publicaciones no se hubiere presentado oposición, el notario oír a la Procuraduría General de la Nación.

Cumplidos los requisitos anteriores, el notario autorizará la escritura correspondiente, la cual será firmada por la persona que, en su carácter de fundador, constituye el patrimonio familiar.

La escritura consignará los nombres de los beneficiarios, bienes que incluye el patrimonio familiar, así como el valor y el tiempo de duración de éste.

Artículo 200. Registro.

Para la inscripción en los registros respectivos, según la clase de bienes que formen el patrimonio familiar, bastará copia simple legalizada de la escritura y el respectivo duplicado de ésta.

CAPÍTULO XIV SUBASTAS

Artículo 201. Solicitud de subasta.

Para que pueda anunciarse subasta voluntaria deberá acreditarse, por el que la solicite, que le pertenece o que tiene la libre disposición del bien objeto de la subasta, así como los gravámenes y anotaciones vigentes que aparezcan en el Registro, en su caso. La subasta deberá notificarse a los que tengan interés. Después de que se hayan satisfecho los requisitos anteriores, el notario dispondrá el anuncio de la subasta en la forma y en las condiciones que propusiere el que la haya solicitado. La subasta podrá repetirse cuantas veces lo pida el interesado.

En la subasta voluntaria, el vendedor puede establecer libremente las condiciones que le convengan y decidir la aceptación de las propuestas hechas por los postores. Sin que conste el consentimiento del vendedor, lo cual se asentará en el acta, el notario no podrá mandar apercibir de remate. En el acta de adjudicación deberán consignarse los términos y condiciones del contrato.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAPÍTULO XV TITULACIÓN SUPLETORIA

Artículo 202. Solicitud.

La solicitud de titulación supletoria podrá formularse ante notario, de conformidad con el Código Civil y lo establecido en el Decreto 49-79 del Congreso de la República y sus reformas.

Artículo 203. Requisitos de la solicitud.

El solicitante deberá expresar al notario:

- 203.1. Descripción del inmueble indicándose nombre y dirección, si los tuviere, ubicación con indicación de aldea, municipio o departamento, su extensión, así como su condición de rústico o urbano.
- 203.2. Nombres y apellidos de los colindantes actuales, especificando los linderos y medidas lineales, servidumbres activas y pasivas, edificaciones, cultivos y cualquier otra característica que lo haga perfectamente determinable.
- 203.3. Nombre y apellidos de las personas de quienes se adquirió la posesión, fecha y modo de la adquisición, acompañando en su caso los documentos que la justifiquen.
- 203.4. Tiempo que el solicitante y sus antecesores han poseído el inmueble y declaración acerca de si sobre el mismo existe litigio, limitaciones o cuestión pendiente, así como que éste no está inscrito en el Registro de la Propiedad.
- 203.5. Proposición de experto medidor, que debe ser profesional colegiado para que levante el plano del inmueble, llenando los requisitos establecidos en la ley para la primera inscripción de dominio.
- 203.6. Indicación de si el inmueble tiene o no matrícula fiscal o municipal y valor del bien a titular. y
- 203.7. Proposición de dos testigos que sean vecinos y propietarios de bienes raíces en la jurisdicción municipal donde esté situado el inmueble.

Artículo 204. Documentos.

El solicitante presentará al notario:



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

- 204.1. Los documentos que se relacionen con el inmueble si los hubiere.
- 204.2. La medida legal y el plano, si estuvieren hechos por profesional colegiado.
- 204.3. Documentos en los que conste que el peticionario o las personas que forman la entidad jurídica solicitante, son guatemaltecos de origen, si el inmueble está situado en las áreas de reserva de dominio del Estado o en las fajas fronterizas o del litoral.

Artículo 205. Trámite.

Estando la solicitud conforme a derecho, el notario mandará:

- 205.1. Que con citación de los colindantes y de las personas que aparecieren con interés en el inmueble, se publiquen en el Diario Oficial, por tres veces durante un mes, edictos que contengan el nombre y apellidos del solicitante y la identificación precisa del inmueble indicando la ubicación, dirección municipal, extensión, linderos, colindantes actuales, edificaciones y cultivos.
- 205.2. Se fijen edictos con igual contenido en el juzgado de paz y en la municipalidad de la jurisdicción del inmueble, los que permanecerán expuestos durante treinta días.
- 205.3. Se reciba la información testimonial propuesta, con citación de la Procuraduría General de la Nación. y
- 205.4. Que la municipalidad en cuya jurisdicción esté situado el inmueble rinda en el perentorio término de quince días el informe a que se refiere el artículo 8° del Decreto 49-79 del Congreso de la República.

Artículo 206. Informe contrario de la municipalidad.

Si el informe de la municipalidad es contrario a la información producida pro el solicitante, el notario concederá quince días a este último para que presente prueba contradiciéndolo. Recibida la prueba, el notario oír de nuevo a la municipalidad, por ocho días.

Artículo 207. Oposición.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

La demanda de oposición en la que se deduzca igual o mejor derecho, debe entablarse ante tribunal competente en juicio ordinario. El tribunal notificará al notario a efecto que suspenda el curso de las diligencias hasta nueva notificación.

Artículo 208. Audiencia a la Procuraduría General de la Nación.

Concluidas las diligencias, el notario dará audiencia a la Procuraduría General de la Nación por ocho días. Con la opinión favorable de la Procuraduría dictará resolución aprobando la titulación supletoria. Si la Procuraduría no evacua la audiencia o su dictamen fuere contrario a la aprobación y no se subsanaren o no pudieren subsanarse las objeciones formuladas, el notario lo hará constar así y remitirá el expediente a un juez de primera instancia del ramo civil para que dicte la resolución respectiva y, en su caso, apruebe o impruebe la titulación supletoria.

Artículo 209. Resolución Aprobatoria.

La resolución aprobatoria que dicte el notario contendrá los requisitos establecidos en el artículo 11 del Decreto 49-79 del Congreso de la República. En dicha resolución deberá insertarse el dictamen favorable de la Procuraduría General de la Nación. A la certificación que se expida para los efectos de inscripción registral, se adherirán los timbres fiscales conforme al valor del inmueble y a dicha certificación se acompañará el plano respectivo.

CAPÍTULO XVI RECTIFICACIÓN DE ÁREA DE BIENES INMUEBLES

Artículo 210. Procedencia.

Los propietarios de bienes inmuebles, cuya área real sea menor que la inscrita en el Registro de la Propiedad, podrán solicitar ante un notario la rectificación de esta última.

Artículo 211. Solicitud.

En el acta notarial que abra el expediente, los interesados, bajo juramento, deberán proporcionar la información y documentos siguientes:

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

- 211.1. Nombres completos y datos de identificación personal de los requirentes.
- 211.2. Dirección municipal del inmueble cuya rectificación de área se solicita, o bien constancia de la municipalidad respectiva, en la que se indicará que se trata del bien al que corresponden los datos de inscripción registral que deberán acompañarse.
- 211.3. Relación del área que aparece inscrita en el Registro de la Propiedad y afirmación de que el área real es inferior a la inscrita.
- 211.4. Nombres y dirección de todos los colindantes actuales del inmueble.
- 211.5. Nombres y dirección del ingeniero civil, arquitecto o ingeniero agrónomo que se proponga como experto medidor, acreditando la calidad de éste como profesional colegiado activo.
- 211.6. Certificación del Registro de la Propiedad, en la que conste la primera y las últimas inscripciones de dominio del inmueble, los gravámenes, hipotecas o limitaciones vigentes, así como las desmembraciones si las hubiere. Si el inmueble se encuentra hipotecado deberá presentarse documento en el que se acredite el consentimiento del acreedor o del interesado para que se realice la rectificación física solicitada.

Artículo 212. Medida.

Después de faccionar el acta inicial, el notario resolverá que se mida el inmueble y para ello nombrará al experto propuesto, a quien notificará y discernirá el cargo. El medidor deberá presentar el resultado de su expertaje dentro de los quince días siguientes a la fecha en que haya aceptado el cargo, y acompañará a su informe un plano en el que conste la siguiente información adicional respecto del inmueble: área real, colindancias actuales, rumbos o azimut o coordenadas referidas al sistema geodésico nacional.

Artículo 213. Notificación a colindantes.

El notario notificará las diligencias a todos los colindantes, a quienes entregará copia del acta inicial, del informe y del plano del área real. En el mismo acto deberá dejar constancia de cada notificación en el



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

expediente y hará saber a los colindantes que tienen ocho días hábiles para oponerse a las diligencias.

Artículo 214. Publicaciones.

En caso de no poder notificar a todos los colindantes, el notario lo hará constar por medio de una razón en el expediente y dispondrá la publicación de un edicto en el diario oficial y en otro de reconocida circulación en el país, para que, dentro de los ocho días hábiles siguientes, se presenten las oposiciones procedentes. En el edicto se deberán consignar los datos siguientes:

- 214.1. Nombres del solicitante.
- 214.2. Objeto de las diligencias.
- 214.3. Área real y área inscrita en el Registro de la Propiedad.
- 214.4. Números registrales y dirección o ubicación exacta del inmueble cuya rectificación de área se solicita.
- 214.5. Citación a posibles opositores.
- 214.6. Firma, sello y número de registro del notario, así como dirección de la sede notarial.

Artículo 215. Oposición.

Si se presentaren oposiciones, el notario remitirá las diligencias a la Sección de Tierras del Ministerio de Gobernación, autoridad administrativa a la que corresponderá resolver el asunto.

Si la oposición se declare sin lugar, la Sección de Tierras devolverá las actuaciones al notario, para que éste continúe el trámite. Si fuere declarada con lugar, dicha Sección ordenará que se archive el expediente.

Si no se presentaren oposiciones dentro del plazo indicado, el notario lo hará constar en las diligencias.

Artículo 216. Audiencia a la Procuraduría General de la Nación.

Antes de emitir la resolución final, el notario deberá dar audiencia a la Procuraduría General de la Nación, a la que enviará el expediente completo. La Procuraduría deberá pronunciarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de las diligencias.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Artículo 217. Resolución.

Cumplidos los requisitos anteriores, el notario dictará resolución en la que declarará con lugar la rectificación, hará constar la extensión que efectivamente corresponde al inmueble, los nombres de los colindantes actuales y los datos técnicos de la medida correspondiente.

Acto seguido el notario elaborará la escritura respectiva y pondrá razón de ello en el expediente.

Artículo 218. Testimonio e inscripción.

Dictada la resolución a que se refiere el artículo anterior, el notario extenderá testimonio en duplicado, el cual deberá incluir la resolución, el informe del medidor, la opinión de la Procuraduría General de la Nación y el plano respectivo. Con base en el testimonio, el Registro de la Propiedad deberá efectuar las operaciones correspondientes a la rectificación del área del inmueble.

TÍTULO XI SANCIONES POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

CAPÍTULO I SANCIONES

Artículo 219. Sanciones.

Si los notarios incurren en responsabilidad administrativa por contravenir los preceptos de esta ley o de cualquiera otra aplicable al ejercicio de la función notarial, podrá aplicárseles las sanciones siguientes:

- 219.1. Amonestación.
- 219.2. Multa.
- 219.3. Suspensión temporal.
- 219.4. Suspensión definitiva.

Las tres primeras serán impuestas por la Dirección Nacional del Notariado y la última por la Corte Suprema de Justicia, a propuesta de la Dirección.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Las sanciones se impondrán en resolución fundamentada, tomando en cuenta las circunstancias y la gravedad del caso, así como los antecedentes del notario.

Artículo 220. Amonestación.

La amonestación se hará por escrito y se impondrá al notario en los casos siguientes:

- 220.1. Retardar injustificadamente la entrega de testimonios, previo requerimiento escrito de la Dirección a solicitud de parte interesada.
- 220.2. Demorar sin causa justificada la realización de un trámite o actuación requeridos por la ley, previa queja por escrito ante la Dirección.
- 220.3. Incurrir en actos u omisiones de formalidades exigidas por la ley que puedan ser subsanadas.
- 220.4. Impedir u obstaculizar la labor de los inspectores y revisores de la Dirección, en el ejercicio de las atribuciones legales de éstos.
- 220.5. No atender los requerimientos formulados por la Dirección, sin que medie causa justificada.
- 220.6. Actuar con negligencia en el ejercicio de su función.

Artículo 221. Multa.

Las multas serán de cinco a veinte unidades, en los casos de las siguientes infracciones:

- 221.1. No entregar a la Dirección, en el plazo que establece la ley, los testimonios especiales, índices, avisos, expedientes y cualquier otro documento que deba remitirse a dicha Dirección.
- 221.2. No entregar en tiempo los formularios o avisos que deba enviar a las oficinas públicas.
- 221.3. En los casos en que se contravengan las disposiciones de la presente ley y si éstas causaren la nulidad del documento notarial, la multa será de veintiuna a doscientas unidades.
- 221.4. La multa será de doscientas una a quinientas unidades si en el término de un año, a partir de la fecha de la primera infracción, el notario reincide en una de las infracciones previstas en el artículo anterior o reincida en los mismos términos, en una de las

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

faltas previstas en los numerales 221.1 y 221.2 del presente artículo.

Artículo 222. Suspensión temporal.

La suspensión temporal impuesta a un notario no podrá ser menor de seis meses ni exceder de dos años y procederá por las siguientes causas:

- 222.1. Desempeñar sus funciones por interpósita persona o permitir la suplantación de su persona, firma o sello.
- 222.2. Ejercer su función en contravención de lo dispuesto en los numerales 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 y 11.7 del Artículo 11; en los numerales 13.1, 13.2, 13.3 y 13.4 del Artículo 13; y en el Artículo 14 de esta ley.
- 222.3. Revelar dolosamente datos sobre los que deba guardar secreto profesional.
- 222.4. Proporcionar información falsa a la Dirección.
- 222.5. Cometer habitualmente las infracciones señaladas en el artículo anterior.

Artículo 223. Suspensión definitiva.

La suspensión definitiva impuesta a un notario procederá por las siguientes causas:

- 223.1. Incurrir en falta de probidad en el ejercicio de su función.
Son faltas de probidad, las siguientes:
 - 223.1.1 Haber recibido el monto de tributos, contribuciones o tasas provenientes del negocio celebrado y no enterarlos a la autoridad correspondiente. Para los efectos de la presente disposición se entenderá que el notario ha incurrido en falta de probidad, si los recursos citados no son pagados a más tardar dentro de los tres meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo que por ley corresponda para ser enterados, sin que medie justificación alguna.
- 223.2. Haber sido condenado por sentencia ejecutoriada, por delitos dolosos contra la fe pública, la administración de justicia, la administración pública, la vida, integridad, libertad, seguridad y patrimonio de las personas, y la quiebra o insolvencia fraudulentas.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

223.3. Incurrir en las infracciones señaladas en el artículo anterior después de haber sido suspendido temporalmente dos veces.

223.4. Ejercer su función en contravención de lo dispuesto en el numeral 11. 6 del Artículo 11 de esta ley.

CAPÍTULO II

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR Y REHABILITACIÓN

Artículo 224. Procedimiento.

El procedimiento para imponer una sanción deberá iniciarlo la Dirección, ya sea a petición de parte presentada por escrito o verbalmente, o bien de oficio cuando se tenga conocimiento de cualquier hecho o circunstancia que causare responsabilidad administrativa del notario. Las personas directamente perjudicadas por faltas cometidas por un notario tendrán la calidad de parte en el respectivo procedimiento disciplinario, para lo cual deberán señalar con precisión el lugar para recibir notificaciones y citaciones. Cuando el lugar señalado no esté dentro del perímetro de la ciudad capital, las notificaciones y citaciones podrán hacerse por correo certificado con aviso de recepción, en cuyo caso los plazos principiarán a correr dos días después de entregada la respectiva notificación o citación.

Los órganos administrativos y jurisdiccionales que tengan conocimiento de que un notario ha cometido una de las faltas establecidas en esta ley, deberán ponerlo inmediatamente en conocimiento de la Dirección.

Artículo 225. Admisión.

Si el expediente se iniciare a petición de parte, la Dirección decidirá sobre su admisibilidad. Si no se admite para su trámite, la parte afectada podrá interponer, dentro del plazo de los cinco días siguientes a la fecha de la notificación, recurso de revocatoria que resolverá el Consejo Notarial.

Artículo 226. Iniciación del trámite.

Cuando se tenga conocimiento que se ha cometido alguna de las faltas previstas en esta ley, o después de que se haya resuelto favorablemente la admisibilidad de una queja, la Dirección iniciará el trámite



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

correspondiente; para ello citará a las partes a una audiencia que deberá efectuarse en un plazo que no exceda de treinta días, advirtiéndoles que deben presentar las pruebas respectivas en la misma diligencia. Simultáneamente, se ordenará que se practique de oficio la investigación que proceda. El notario deberá ser citado, bajo apercibimiento de continuar el trámite en su rebeldía si dejare de comparecer sin justa causa. En la audiencia, además del notario, podrán estar presentes la persona interesada y los testigos si los hubiere. Las partes podrán comparecer asesoradas por abogado. Si el notario no concurre, ni justifica la causa justa de su incomparecencia, la Dirección continuará el trámite y practicará la audiencia respectiva, oyendo a la persona afectada si estuviere presente e incorporará las pruebas correspondientes.

Artículo 227. Audiencia y resolución.

Si al inicio de la audiencia el notario aceptare haber cometido la falta, la Dirección resolverá sin más trámite.

En caso contrario, la Dirección continuará la audiencia, dando intervención a las partes involucradas y recibiendo los medios de prueba que éstas aporten y las pruebas que se hubieren recabado de oficio. El trámite se impulsará por la Dirección, la que pronunciará su fallo en un plazo de quince días.

Contra lo resuelto en definitiva por la Dirección cabrá recurso de revocatoria, el cual deberá interponerse dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la notificación del fallo. De dicho recurso conocerá el Consejo Notarial, que deberá resolverlo en un plazo no mayor de sesenta días y contra dicha resolución no cabrá ningún recurso.

Si la sanción prevista es la de suspensión definitiva, después de concluida la audiencia la Dirección enviará el expediente completo, con la recomendación pertinente, a la Corte Suprema de Justicia.

Artículo 228. Responsabilidad penal.

Si del procedimiento sancionador resultaren indicios de la comisión de un hecho calificado como delito, la Dirección, el Consejo Notarial o la Corte



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Suprema de Justicia, después de imponer la sanción administrativa que corresponda, remitirán certificación del expediente al Ministerio Público.

Artículo 229. Certificación de sentencia.

En caso de producirse el supuesto contemplado en el numeral segundo del Artículo 10 de esta ley, los tribunales que conozcan del asunto remitirán certificación de la sentencia que se hubiere dictado contra el notario, a la Corte Suprema de Justicia, y ésta a su vez remitirá copia al Registro de Notarios de la Dirección Nacional de Notariado, para los efectos legales pertinentes.

Artículo 230. Rehabilitación.

Los notarios que hubieren sido sancionados con suspensión definitiva o condenados por los delitos a que se refiere el Artículo 9, numeral 9.3, con excepción de delitos dolosos contra la fe pública, que conlleven como pena accesoria dicha suspensión, podrán ser rehabilitados siempre que concurrieren las circunstancias siguientes:

- 230.1. Que hayan transcurrido cinco años después de haber cumplido la condena o desde que se impuso la suspensión definitiva.
- 230.2. Que durante todo ese tiempo el notario hubiere observado buena conducta.
- 230.3. Que no hubiere reincidencia conforme al Código Penal.
- 230.4. Que el órgano competente del Colegio Profesional emita dictamen favorable.

Artículo 231. Solicitud.

La solicitud de rehabilitación se presentará ante la Corte Suprema de Justicia, y a ella se acompañará la documentación que compruebe los requisitos establecidos en los incisos 230.1, 230.3 y 230.4 del artículo anterior. En lo que respecta al inciso 230.2 del mismo artículo, el notario deberá presentar dos testigos de reconocida honorabilidad, para que declaren lo pertinente en la audiencia que señale la Corte.

Artículo 232. Trámite.



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Recibida la solicitud de rehabilitación y verificada la efectiva concurrencia de los requisitos a que se refiere el Artículo 230, la Corte Suprema de Justicia emitirá resolución fundamentada, en la que, en un plazo no mayor de treinta días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, se declarará la procedencia o improcedencia de la rehabilitación.

Artículo 233 Recursos.

Contra la resolución que se dicte no cabrá más recurso que el de aclaración o ampliación, los que se resolverán de plano, dentro de los quince días hábiles siguientes.

Artículo 234. Remisión a la Dirección Nacional de Notariado.

Al quedar firme la resolución, la Corte Suprema de Justicia remitirá certificación de lo actuado al Registro de Notarios de la Dirección del Notariado, para los efectos legales pertinentes.

TÍTULO XII

ARANCEL

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 235. Honorarios profesionales.

Los notarios podrán contratar libremente sus honorarios y condiciones de pago con las personas que soliciten sus servicios profesionales. A falta de convenio, los honorarios se regularán conforme al arancel que establece esta ley, debiéndose agregar el monto del Impuesto al Valor Agregado.

Si dos o más personas solicitan los servicios del notario, serán solidariamente responsables del pago de los honorarios.

Los gastos e impuestos que ocasione el acto o contrato, así como los derechos de inscripción que cobren los registros respectivos, serán cubiertos por el interesado.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Artículo 236. Servicios fuera de la sede notarial.

El notario que prestare sus servicios fuera del perímetro urbano en que se encuentre su sede notarial, además de los honorarios que le correspondan conforme al arancel que se fija en esta ley, tendrá derecho a cobrar doscientos quetzales (Q200.00) por hora de trabajo.

Artículo 237. Tarifas.

Los notarios cobrarán, en concepto de honorarios, las siguientes cantidades:

- 237.1. De quinientos a veinte mil quetzales, por autorización de escrituras públicas de valor indeterminado, según la importancia de éstas.
- 237.2. Por escrituras públicas de valor determinado, los honorarios se fijarán de conformidad con las reglas y porcentajes siguientes:
 - 237.2.1. Hasta un mil quinientos quetzales (Q1, 500.00), si el valor no excede de veinticinco mil quetzales.
 - 237.2.2. Si el valor es de veinticinco mil uno hasta cien mil quetzales, los honorarios serán de Q1, 500.00 de base más el uno y medio por ciento sobre el valor del contrato.
 - 237.2.3. En escrituras cuyo valor sea de cien mil uno hasta quinientos mil quetzales, los honorarios serán de Q 3,000.00 de base más el uno por ciento sobre el valor del contrato.
 - 237.2.4. Si el valor es de quinientos mil a un millón de quetzales, los honorarios serán de Q 8,000.00 de base más el cero punto cincuenta por ciento sobre el valor del contrato.
 - 237.2.5. Si el valor es de un millón de quetzales en adelante, los honorarios serán de Q13, 000.00 de base más el cero punto veinticinco por ciento sobre el valor del contrato.
- 237.3. Por escrituras canceladas, los notarios cobrarán la tercera parte de los honorarios que les corresponderían si las hubieren autorizado; sin embargo, en ningún caso esa cantidad podrá exceder de diez mil quetzales (Q10, 000.00). El otorgante o los otorgantes que representen un mismo interés y hubieren dado

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

lugar a la cancelación de una escritura estarán obligados a pagar los honorarios correspondientes.

- 237.4. Por autorización de cada testimonio o copia simple legalizada, los honorarios serán de setenta y cinco quetzales (Q.75.00).
- 237.5. Por acta notarial, los honorarios serán de doscientos a cinco mil quetzales, según su importancia.
- 237.6. Por protocolización de documentos, los honorarios serán hasta de cinco mil quetzales (Q5000.00).
- 237.7. Por los inventarios se cobrará la mitad de los honorarios establecidos para las escrituras de valor determinado, y se tomará como base el valor del activo inventariado.
- 237.8. Por auténticas y legalizaciones, los honorarios serán de cuarenta quetzales a un mil quetzales, según la importancia de esos instrumentos.
- 237.9. Por la redacción de un documento privado o la elaboración de una minuta, se cobrará la mitad de los honorarios que corresponderían de conformidad con los incisos 237.1 y 237.2 de este artículo, pero si la minuta fuere vertida a instrumento público por el propio notario, éste cobrará solamente los honorarios fijados en dichos incisos, según corresponda.
- 237.10. Por los proyectos de partición judicial los honorarios serán del tres por ciento del valor del bien divisible, hasta un máximo de veinte mil quetzales (Q.20.000.00), más el uno por ciento del excedente.
- 237.11. Por las consultas que se le hicieren en relación con actos o contratos, el notario cobrará de cuatrocientos a dos mil quetzales, según la importancia y cuantía del negocio, así como la extensión o complejidad de la consulta.

Artículo. 238. Procesos en sede notarial.

Por los procesos sucesorios que se tramiten ante sus oficinas, los notarios cobrarán los siguientes honorarios:

El cinco por ciento si el valor del activo inventariado no excede de cincuenta mil quetzales; de cincuenta mil uno a quinientos mil quetzales, dos mil quinientos quetzales de base más el dos por ciento; y si dicho



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

valor es de quinientos mil un quetzales en adelante, tres mil quinientos quetzales de base más el uno por ciento sobre el excedente.

Por la fase administrativa de liquidación y pago de los impuestos que cause la mortual, el notario cobrará el treinta por ciento de los honorarios anteriores.

En los otros casos de jurisdicción voluntaria, el notario cobrará el tres por ciento sobre el monto del asunto. Si éste no pudiera determinarse, el notario tendrá derecho a cobrar de mil a quince mil quetzales, según la importancia del asunto. Si en uno de dichos procesos hubiere parte determinada y parte indeterminada, se aplicarán ambas disposiciones.

Artículo.239. Casos especiales.

Se cobrará el veinticinco por ciento de los honorarios que resulten conforme al arancel, en los casos en que el notario actúe en los asuntos de interés social a que se refiere el Título IX de la presente ley.

Si una de las partes contratantes es el Estado o sus entidades descentralizadas, autónomas o semi autónomas, los municipios y sus empresas, o cualquier otra entidad pública, los notarios cobrarán el veinticinco por ciento de los honorarios establecidos en el arancel al que se refiere esta ley. En ningún caso, los honorarios podrán ser mayores de un millón de quetzales (Q1,000,000.00).

Artículo 240. Acción de cobro.

El notario cuyos honorarios no hubieren sido cancelados, o sus herederos en su caso, tendrán acción directa para hacer el cobro correspondiente a la persona o personas obligadas al pago.

El notario podrá pedir la liquidación de sus honorarios ante juez competente de su domicilio, quien dará vista por dos días a los interesados, y si en dicho plazo los obligados al pago no presentaren constancia fehaciente de haberlo efectuado, el juez aprobará la liquidación ajustándola al arancel, si eso fuere lo procedente. El auto que apruebe la liquidación será apelable y, al estar firme, constituirá título ejecutivo que podrá ejecutarse dentro de las mismas diligencias, por el

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

procedimiento de la vía de apremio o en proceso independiente mediante certificación del auto.

TÍTULO XIII DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y DEROGATORIAS

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 241. Regularización de notarios en el extranjero.

Los notarios a que se refiere el Artículo 91 de esta ley deberán regularizar su situación ante la Dirección, inscribiéndose en el Registro de Notarios que ejercen en el extranjero, lo cual deberán hacer en un plazo no mayor de tres meses contados a partir de la vigencia de la presente ley.

Artículo 242. Papel para Protocolo.

En el plazo de los sesenta días siguientes a la fecha en que entre en vigencia esta ley, los notarios deberán comunicar a la Dirección, por escrito, el número de hojas de protocolo que tengan en su poder y la correspondiente identificación de dichas hojas. Dicho papel especial podrá ser utilizado hasta que se agote.

El incumplimiento de la norma anterior será sancionado con una multa de cincuenta unidades, la que se impondrá de conformidad con el procedimiento establecido en esta ley.

Artículo 243. Notariado digital.

Para el cumplimiento del objeto de la presente ley, la Dirección Nacional del Notariado tendrá facultad para utilizar la tecnología digital, eléctrica, magnética, inalámbrica, alámbrica, óptica, electromagnética o cualquier otra similar conocida o por conocerse.

Los documentos notariales podrán ser generados, reproducidos, enviados, recibidos, archivados o procesados por cualquier medio que utilice la referida tecnología.

Cuando se disponga de los procedimientos de seguridad que permitan verificar y garantizar la autenticidad e integridad del documento y de las

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

firmas, la Corte Suprema de Justicia emitirá los Acuerdos correspondientes a fin de regular la utilización de esos medios tecnológicos.

Artículo 244. Epígrafes.

Los epígrafes de los artículos de la presente ley no tienen carácter interpretativo.

Artículo 245. Asuntos pendientes.

Los asuntos que al entrar en vigencia la presente ley estén en trámite ante notario se continuarán y finalizarán conforme a las disposiciones del Decreto Ley 107, Código Procesal Civil y Mercantil; el Decreto 54-77 del Congreso, Ley Reguladora de la Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria; y el Decreto-Ley 125-83, que regula la rectificación de área de bienes inmuebles urbanos.

Artículo 246. Supresión del cargo de Escribano de Cámara y de Gobierno.

Seis meses después de que entre en vigencia esta ley, se suprime el cargo de Escribano de Cámara y de Gobierno. El protocolo en su poder deberá ser entregado a la Dirección Nacional del Notariado.

Artículo 247. Reglamento.

El Reglamento de esta Ley deberá emitirse dentro de los sesenta días siguientes a la entrada de vigencia de la misma.

Artículo 248. Modificaciones.

Toda disposición que se emita para crear, suprimir o modificar los derechos y las obligaciones de los notarios que contienen esta ley, deberá hacerse con reforma expresa a la misma, a efecto de que se conserve su unidad de contexto.

Artículo 249. Derogatoria.

Salvo lo dispuesto en el Artículo 245 para asuntos pendientes, se derogan el Decreto 314 del Congreso de la República, Código de Notariado y sus reformas; el Decreto 54-77 del mismo Organismo, Ley Reguladora de la Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria; el Decreto-Ley



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

125-83, que regula la rectificación de área de bienes inmuebles urbanos; los artículos 38 y 40 del Decreto 2-89 del Congreso de la República, Ley del Organismo Judicial; los artículos 442, 449 y del 488 al 502 del Decreto-Ley 107, Código Procesal Civil y Mercantil; los artículos 531 y 865 del Decreto-Ley 106, Código Civil; los artículos 23 y 24 del Decreto 37-92 del Congreso de la República en cuanto se refieren al papel sellado especial de protocolos; artículo 36 inciso f del Decreto 114-97 del Congreso de la República; y cualquier otra disposición que se oponga a esta ley.

Artículo 250. Vigencia. Esta ley entrará en vigencia___ a partir de su publicación en el Diario de Centro América.